

AMPARO EN REVISIÓN 792/2016
QUEJOSO: *****

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día primero de marzo de dos mil diecisiete.

V I S T O S; para resolver los autos del amparo en revisión **792/2016**, interpuesto por *********, por propio derecho; y,

R E S U L T A N D O:

1. **PRIMERO.- Antecedentes.** De constancias de autos se advierten los siguientes:

2. En escrito fechado el doce de noviembre de dos mil quince, presentado el día trece siguiente,¹ *********, solicitó de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en adelante, COFEPRIS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la expedición de una autorización que le permitiera el **consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas)**, así como del *psicotrópico* THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “**marihuana**” o “**cannabis**”.

¹ Cuaderno del Juicio de Amparo Indirecto *********. Fojas 39 y 40.

AMPARO EN REVISIÓN 792/2016

3. La autorización, se solicitó expresamente para que el peticionario pueda **consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos.**

4. Además, dentro del referido escrito, el quejoso también precisó que la autorización se pedía para ejercer los derechos correlativos al “**autoconsumo**” de marihuana, tales como la **siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia** de la misma.

5. El texto de la solicitud de autorización en comento, es el siguiente:

“C*****.
Comisionado Federal de la
Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios.
Presente.

El suscrito ***** , mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José María de Teresa 221, Col. Campestre San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, Distrito Federal; comparezco a exponer:

En pleno ejercicio de mis derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud, solicito se me otorgue la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6a (7), A 7, A8, A 9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"). Se promueve la autorización para que el peticionario pueda consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos.

Asimismo, se pide la citada autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana; tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, ~~importación~~ acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo, y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

En espera de que se me otorgue la multicitada autorización, quedo de Usted.

Atentaemente [sic]
*****”

6. Destaca que en una anotación a mano, se incluyó también en la solicitud de autorización, la importación de marihuana.
7. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince,² el Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, informó al peticionario de amparo, que hasta ese momento no podía ser expedida la autorización solicitada. Ello, en términos del oficio que a continuación se transcribe:

“C. *****

PRESENTE

No. DE INGRESO *****
México, D.F. 24 de noviembre de 2015

Asunto: Autorización de consumo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 17 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8 fracciones XXIV y XXX, 4 fracción III, 17 bis fracciones IV y VI, 194, 194 bis, 244, 245, 247, 283, 284, 285, 289, 290, 368, 869, 371 y 375 fracción IX de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 17- A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, inciso C fracción X, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 45, 133, 145, 153, 155, 156, 195 y 196 del Reglamento de Insumos para la Salud; 3° fracción I, inciso j y VII y 14 fracción I y VII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y en relación a su solicitud con número de entrada 153300EL350728 de fecha 13 de noviembre de 2015, en la que solicita autorización para que el peticionario, el C. *****; pueda consumir Cannabis Sativa (Indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (Tetrahidrocannabinol), al respecto se informa:

Conforme al artículo 235 y 237 de la Ley General de Salud indica ‘Queda prohibido en el territorio nacional, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, de las siguientes sustancias y vegetales, opio preparado, para fumar, diaceltimorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, Indica y americana o marihuana, papever somniferum o adormifera, papaver bactreatum y erithroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones’.

Conforme al artículo 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud se indica ‘Queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, de las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245’ entre las sustancias enlistadas en la fracción I del Artículo 245 se encuentra el THC (Tetrahidrocannabinol).

² *Ibidem*. Foja 41.

AMPARO EN REVISIÓN 792/2016

Por lo anterior expuesto hasta el momento no puede ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahidrocannabinol).

*SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA*

JUAN CARLOS GALLAGA SOLORZANO”.

8. **SEGUNDO.- Trámite y Resolución del Juicio de Amparo Indirecto número *******. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil quince,³ ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes:

9. **A) Autoridades responsables:**

- 10. - El **Presidente** de los Estados Unidos Mexicanos;
- 11. - La **Cámara de Senadores** del Congreso de la Unión;
- 12. - La **Cámara de Diputados** del Congreso de la Unión, y;
- 13. - El **Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS**.

14. **B) Actos reclamados:**

- 15. - Del **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud, en específico de los artículos **237, 245, 247, 248, 368 y 479**.

³ *Ibidem*. Fojas 2-38.

16. - De las **Cámaras de Diputados y Senadores**, la expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos **234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479**.

17. - Del **Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS**, la aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos **234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479** de la Ley General de Salud.

18. - Los efectos y consecuencias, incluyendo actos y procedimientos, que deriven o puedan derivar de los referidos actos reclamados.

19. **C) Derechos Fundamentales Violados.** Se argumentó que los actos reclamados, vulneraban los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de la salud propia. Igualmente, se argumentó que se transgredía la obligación de que cualquier restricción a los derechos humanos persiga un bien imperativo, sea instrumental para conseguir los fines deseados y que sea proporcional. Finalmente, se estimó que se vulneraban los principios de libertad, dignidad y pluralismo, y se transgredían los límites objetivos de la facultad del Estado de legislar en materia de salubridad general y de establecer delitos y faltas contra la federación.

20. Para ello, el quejoso refirió que los citados derechos y principios transgredidos, se encontraban dispuestos en:

21. -Los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 19, 25, 29, 73, fracciones XVI y XXI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el preámbulo y artículos 1º y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Preámbulo y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

22. En su demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y planteó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

23. De dicha demanda, conoció el **Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**, mismo que en proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince,⁴ ordenó formar y registrar el expediente con el número *********; asimismo, requirió a la parte promovente en los siguientes términos:

a) *“Señale si es su intención señalar como autoridad responsable al **Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**, y de ser así, precise qué acto en específico le reclama.*

b) *Indique si reclama al **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, los artículos 234 y 235 de la **Ley General de Salud**.*

c) *De conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que **exhiba cinco** copias de su escrito aclaratorio (...).*

24. En atención a lo anterior, por escrito recibido en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el día dieciséis de diciembre de dos mil quince,⁵ la parte quejosa desahogó la prevención ordenada y, en síntesis, manifestó lo siguiente:

*“...que no es mi intención señalar al **Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios** como autoridad responsable, aclarando que las*

⁴ *Ibidem.* Fojas 42-45.

⁵ *Ibidem.* Fojas 48-49.

referencias que se hagan al mismo, se deberán entender al Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al ser la autoridad que emitió el acto reclamado...

(...)

*...señalo que reclamo del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud, en específico de los artículos **234, 235**, 237, 245, 247, 248, 368 y 479.*

(...)

...Exhibo en este momento las cinco copias de mi escrito aclaratorio, para que se agreguen a los autos a la vez de integrar debidamente las copias de traslado...".

25. Así, por acuerdo de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince,⁶ el Juez de Distrito del conocimiento admitió a trámite la demanda de amparo, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público, requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados y, tuvo como pruebas las aportadas por la parte quejosa.

26. Seguidos los trámites de ley, el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis,⁷ el Juez de Distrito del conocimiento celebró la audiencia constitucional y, dictó sentencia, en la que resolvió:

27. **-Sobreseer** en el juicio de amparo por cuanto hace al acto consistente en la **orden de publicación de la Ley General de Salud** atribuido al **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos**.

28. Lo anterior, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108,

⁶ *Ibidem*. Fojas 50 y 51.

⁷ *Ibidem*. Fojas 188-255.

AMPARO EN REVISIÓN 792/2016

fracciones III y VIII, todos de la Ley de Amparo, y toda vez que no se atribuyeron a dicho acto vicios propios, ni se formularon conceptos de violación a fin de demostrar la inconstitucionalidad de dicha etapa legislativa.

29. -Estimar de oficio que respecto del **artículo 479 de la Ley General de Salud**, se actualizaba la causa de **improcedencia** prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la existencia del primer acto concreto de aplicación del referido numeral.

30. -**Negar el amparo** y protección de la Justicia Federal, en contra de la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, específicamente por lo que hace a los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, así como respecto del acto concreto de aplicación, consistente en la determinación contenida en el oficio del veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

31. Los puntos resolutivos de dicho fallo, se emitieron en los términos siguientes:

“PRIMERO.** Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ** , respecto del acto y autoridad precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, en términos de los argumentos ahí vertidos.*

SEGUNDO.** La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ** , en contra de la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, específicamente por lo que hace a los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 así como respecto del acto concreto de aplicación, consistente en la determinación contenida en el oficio del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, de conformidad con los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución”.*

32. **TERCERO.- Interposición y Trámite del Recurso de Revisión.**

33. **3.1. Revisión Principal *****.** Inconforme con la resolución anterior, por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil

dieciséis,⁸ ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,⁹ se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno.

34. Del asunto correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis,¹⁰ lo admitió a trámite y lo registró con el número de toca de amparo en revisión *****.

35. **3.2. Revisión Adhesiva.** Por acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis,¹¹ el Tribunal Colegiado del conocimiento agregó a los autos del amparo en revisión *****, el oficio signado por *****, Subdirectora de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, **en representación de la autoridad señalada como responsable “C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”**, con el que interpuso revisión adhesiva.

36. Seguidos los trámites de ley, el seis de julio de dos mil dieciséis,¹² el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó resolución con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. En la materia del recurso competencia de este tribunal colegiado, no se sobresee en el juicio de amparo.

SEGUNDO. Se reserva competencia originaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.

⁸ Cuaderno del Amparo en Revisión *****. Fojas 3-61.

⁹ Cuaderno del Juicio de Amparo Indirecto *****. Foja 330.

¹⁰ *Ibidem*. Fojas 83-105. Foja 62.

¹¹ *Ibidem*. Foja 93.

¹² *Ibidem*. Fojas 189-193.

TERCERO. *Previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.*

37. **CUARTO.- Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil dieciséis,¹³ el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó asumir la competencia originaria para que este Alto Tribunal de la Nación conociera del recurso de revisión, ordenó turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y, enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación respectivo.

38. **QUINTO.- Avocamiento.** Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis,¹⁴ el Presidente de la Primera Sala, dispuso que la misma se avocara al conocimiento del presente asunto, y ordenó devolver los autos a la ponencia respectiva, a fin de que formulara el proyecto de resolución y se diera cuenta de él, a esta Primera Sala.

C O N S I D E R A N D O:

39. **PRIMERO.- Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece.

¹³ Cuaderno del Amparo en Revisión 792/2016. Fojas 101-103.

¹⁴ *Ibidem*. Foja 127.

40. Lo anterior, toda vez que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito, y de que en la demanda de amparo, se impugnaron los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

41. **SEGUNDO.- Oportunidad.** No obstante de que se trata de un presupuesto procesal cuyo análisis es de *estudio preferente y oficio*, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procederá al análisis en torno a la oportuna interposición del recurso, toda vez que dicho tópico ya fue estudiado por el Tribunal Colegiado de origen, concluyendo que su presentación se hizo en tiempo.¹⁵

42. **TERCERO.- Legitimación.** *********, por propio derecho y con personalidad reconocida en los autos del cuaderno principal del amparo indirecto *********, interpuso recurso de revisión haciendo valer el derecho procesal que otorga el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley

¹⁵ Según se desprende del considerando segundo de la resolución dictada con fecha seis de julio de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión *********, en el cual se hace constar lo siguiente: "(...) **SEGUNDO.** El medio de impugnación fue interpuesto por el quejoso, dentro del término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia controvertida le fue notificada el **veintinueve de abril de dos mil dieciséis** (foja doscientos cincuenta y nueve del juicio de amparo), de modo que esa notificación surtió sus efectos el día siguiente, dos de mayo, conforme al artículo 31, fracción II, del ordenamiento en cita. Por lo que el plazo para la presentación del recurso transcurrió del **tres al diecisiete de mayo del año en cita**, si se toma en consideración que se descuentan los días siete, ocho, catorce y quince, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el cinco, según el acuerdo 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el recurso de revisión fue recibido el **dieciséis de mayo de dos mil dieciséis**, en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México como se desprende del sello fechador que obra a foja tres del presente toca. Asimismo, la revisión adhesiva se interpuso dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, toda vez que el auto de admisión del recurso principal se notificó a la autoridad recurrente el **veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis** (folio sesenta y siete de este toca), de modo que surtió sus efectos el mismo día, en términos del artículo 31, fracción I, del ordenamiento en cita. Por lo que el plazo para la presentación del recurso transcurrió del **veinticinco al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis**, si se toma en consideración que se descuentan los días veintiocho y veintinueve, por haber sido sábado y domingo inhábil, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tanto que el recurso de revisión adhesivo se recibió el **treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis**, en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados, como se desprende del sello fechador que obra a foja setenta del toca en que se actúa (...)"

AMPARO EN REVISIÓN 792/2016

de Amparo, conforme al cual se puede interponer recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional.

43. En consecuencia, es innegable que si la sentencia que recayó en el juicio de amparo indirecto número ***** negó el amparo que fue interpuesto por el quejoso revisionista, éste tiene la legitimación procesal para combatir dicha negativa. Sólo como referencia, se aclara que en el citado juicio también existió un sobreseimiento, pero éste no fue materia del escrito de agravios correspondiente.

44. Ante lo anterior, se reconoce legitimación al quejoso que interpuso el recurso de revisión en los términos antes señalados.

45. Por otro lado, el recurso de revisión adhesivo también fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que el servidor público que lo interpuso, lo hizo en representación del Presidente de la República, autoridad responsable a la que favoreció la resolución del juicio de amparo y que por tanto, cuenta con legitimación para ello en términos del artículo 82 de la Ley de Amparo.

46. Lo anterior, máxime que en términos del artículo 87 de la propia Ley de Amparo, tratándose de amparo contra normas generales, sólo podrán interponer el recurso de revisión los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

47. **CUARTO.- Cuestiones necesarias para resolver el asunto.**

48. **4.1.- Conceptos de violación.** En el escrito de demanda de amparo, la parte quejosa planteó como conceptos de violación, en síntesis, los siguientes:

49. **4.1.1.- Conceptos de Violación Primero a Quinto.** Indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud.

50. Después de exponer el marco constitucional, convencional y jurisprudencial respecto de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, mismos que se derivan del reconocimiento a la dignidad humana, así como del derecho a la salud, el quejoso sostuvo que **la política prohibicionista respecto del consumo de marihuana establecida en los artículos impugnados, no superaba los exámenes de escrutinio establecidos por la Suprema Corte para realizar restricciones a los derechos fundamentales.**

51. El quejoso argumentó que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que los justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes; en otras palabras, **el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos.**

52. En atención a lo anterior, el quejoso sostuvo que mediante el consumo de marihuana las personas proyectan sus preferencias y rasgos que la diferencian y singularizan del resto de la sociedad. Así, **la prohibición del consumo de marihuana resulta inconstitucional, pues implica la supresión de conductas que confieren al individuo**

una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.

53. Además, señaló que la elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, **el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona.**

54. Por otra parte, también argumentó que **la política prohibicionista que se deriva de los artículos impugnados resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud en su aspecto negativo**, entendido como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. Así, señaló que el Estado no puede interferir en la libertad de los individuos para controlar su salud y su cuerpo, es decir, no puede interferir en la **libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia.**

55. En este sentido, sostuvo que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. Además, advirtió que el Estado ha tomado una postura paternalista mediante la que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres lo suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de **prohibir sustancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.**

56. Así las cosas, el quejoso concluyó que **el régimen prohibicionista constituye una restricción a los derechos anteriormente señalados que no resulta acorde con los requisitos impuestos por el test de proporcionalidad, en tanto que *no cuenta con una finalidad legítima***, pues la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana; *no es instrumental* para prevenir riesgos a la salud ni combatir adicciones, pues no se ha demostrado que la despenalización del autoconsumo aumentaría la demanda, mientras que sí se encuentra demostrado que la prohibición no la ha disminuido; y finalmente, ***no es proporcional, en tanto que existen medidas menos restrictivas para proteger la salud***, además de que los perjuicios que genera la prohibición son mayores respecto de los beneficios que ha traído.

57. **4.1.2.- Sexto Concepto de Violación.** Violación a la finalidad objetiva del derecho penal, así como a la libertad individual y personal, como consecuencia de la penalización del autoconsumo de marihuana.

58. El quejoso, también alegó que el Estado se excedió en sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos al penalizar el autoconsumo de marihuana, transgrediendo la finalidad objetiva del derecho penal y la libertad individual y corporal de las personas, principios establecidos en el artículo 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

59. Lo anterior es así, de acuerdo con el quejoso, pues **el autoconsumo de marihuana es una actividad propia del fuero interno de las personas que no incide en la libertad de otros**, por lo que no existe justificación para que el derecho penal interfiera y limite esta esfera de libertad del individuo.

60. **4.2.- Informes Justificados.** Las autoridades responsables, rindieron sus informes justificados en los siguientes términos:

61. **4.2.1.- Informe justificado de la Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.** Dicha autoridad realiza, en esencia, las siguientes consideraciones:

62. -En principio, refirió que los conceptos de violación eran **infundados e inoperantes**.

63. -Advirtió que el problema de inconstitucionalidad hecho valer en los conceptos de violación por el quejoso, se concentró en **dos motivos de disenso**, que se sintetizan a continuación:

64. **a).-** Que la restricción al consumo de "marihuana", provoca una indebida violación a sus derechos fundamentales, como a la identidad personal, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana; esto, **pues estima que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo**, en virtud de que no se deben imponer modelos y estándares de vida a sus ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos; y,

65. **b).-** Que el Estado se excedió en sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos, al penalizar el autoconsumo de "marihuana", transgrediendo la finalidad objetiva del derecho penal y la libertad individual y corporal de las personas; dicho de otro modo, los quejosos estimaron que el autoconsumo de "marihuana"

debe ser considerado como una actividad propia del fuero interno de las personas que no incide en la libertad de otros, por lo que no existe justificación para que el derecho penal interfiera y limite esta esfera de libertad del individuo.

66. -La autoridad responsable consideró que eran infundados dichos conceptos de violación al referir una supuesta afectación a la dignidad humana, señalando que de ésta se derivan los derechos a la personalidad, a la integridad física y psíquica, a la intimidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil e incluso un derecho a la propia dignidad personal; de acuerdo con el propio reconocimiento de la dignidad humana que hace el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

67. -Asimismo, la autoridad responsable estimó infundados los conceptos de violación referidos a la violación de dichos derechos, pues desde su óptica, los artículos impugnados no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga a las personas a revelar aspectos de su vida privada; no se vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad y propia imagen, pues no se limita la forma de elegir la apariencia, actividad o manera en que los quejosos desean proyectar y vivir su vida; no violan el principio de autodeterminación, ya que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud; y finalmente, porque no ponen en peligro el derecho a la dignidad de las personas, ya que no generan riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios ni tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, además de que es obligación del Estado proporcionar a toda persona el mayor disfrute de salud física y mental, a través de la lucha en contra de las adicciones.

68. -Se señaló que la prohibición contenida en los artículos impugnados por la impetrante del amparo, constituyen medidas instrumentales aptas para proteger la vida y la salud de las personas, evitando la proliferación de sustancias nocivas, pues es de tomarse en consideración que el consumo indebido de psicotrópicos y estupefacientes se ha convertido en uno de los más graves problemas de salud pública, por lo que existe una gran preocupación del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de la sociedad en general, de mantener un estricto control.

69. -Expresó que otro de los motivos de disenso que se planteó, era que inclusive, aunque pudiera parecer prima facie que la legislación general de salud en análisis disponga expresamente *“la prohibición en todo el territorio nacional, de la realización de cualquier acto relacionado con la cannabis sativa (índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: A6a (10a), A6a (7), A7, A8, A9, A10, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”*”; ello **estaría justificado razonable y proporcionalmente, atendiendo al “test de proporcionalidad” implementado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación**, para resolver cuestiones que en apariencia, pudieran parecer viciadas, empero que están debidamente justificadas porque su regulación obedece a la protección del interés social.

70. -Agregó que la revisión de las medidas acorde con el test de proporcionalidad desarrollado en la dogmática alemana y adoptado por los países miembros de tratados internacionales de derechos humanos, y también implementado en México, consiste en el análisis de una relación entre principios, entendidos como mandatos de optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible (de

acuerdo con las posibilidades tácticas y normativas existentes); esto es, los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben resolverse aplicando **un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de meta-principio o el principio último del ordenamiento jurídico.**

71. -Infirió que la medida legislativa impugnada es instrumentalmente **adecuada e idónea** para cumplir con el objetivo señalado, ya que la medida impugnada **es proporcional, pues no se trata de prohibiciones de consumo de marihuana, sino que simplemente se establecen condiciones de ejercicio, lo cual se traduce en un impacto mínimo en los derechos.**

72. -Estimó que las normas reclamadas eran constitucionales, por lo que **no existió violación alguna al proceso y a su exacta aplicación.**

73. -Concluyó que la **Ley General de Salud**, es materialmente constitucional, toda vez que no contraviene lo establecido en la Constitución Federal, ni los tratados internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano es parte.

74. -Alegó que los argumentos bajo los cuales se pretendía demostrar la inconstitucionalidad de la ley impugnada, son meras apreciaciones subjetivas derivadas de una indebida interpretación de los preceptos constitucionales que señala como violados, resultan ser sólo **señalamientos ambiguos y superficiales que en nada demuestran la inconstitucionalidad de la ley impugnada** y por tanto, los conceptos de violación son en esencia inoperantes, además de que en ninguno de los conceptos de violación que expresó la parte quejosa en su escrito de demanda, se refiere cuál es el agravio directo que le causa el pleno

ejercicio de las facultades que le son conferidas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

75. -Finalmente, la autoridad infirió que **debía negarse el amparo y protección** de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en razón de que **no se le causa ningún perjuicio**, puesto que las normas impugnadas no vulneraban sus derechos fundamentales.

76. **4.2.2.- Informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación de la autoridad señalada como responsable C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.** Dicha autoridad externó, en esencia, las siguientes consideraciones dentro de su informe justificado:

77. -Manifestó inicialmente que la autoridad señalada como responsable Presidente de la República, no transgredió los derechos fundamentales a que alude la parte quejosa en su demanda de amparo, toda vez que la promulgación de la Ley General de Salud, se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicho acto está ubicado en el marco constitucional y en consecuencia se debía negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

78. -Solicitó el **sobreseimiento del juicio**, con base en los siguientes agravios:

79. -Primero.- Manifestó que respecto de los **actos reclamados que se negaron**, procedía dictar el sobreseimiento con fundamento en el **artículo 63, fracción IV**, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis de

jurisprudencia VI. 2°. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

80. -Segundo.- Respecto del acto que se aceptó, consistente en la **promulgación de la Ley General de Salud**, mencionó que procedía dictar el sobreseimiento con fundamento en el artículo **63, fracción V**, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo **61, fracción XXIII**, en relación con el artículo 108, fracción VI y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal.

81. -Consideró lo anterior, toda vez que del análisis integral a la demanda, no se advirtió que la parte quejosa adujera en contra de la promulgación de la Ley General de Salud, algún vicio de inconstitucionalidad, esto es, **omitió formular conceptos de violación en contra de tal acto**.

82. -Tercero.- Estimó improcedente el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo **61, fracción XXIII**, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la citada legislación ordinaria.

83. -Señaló que, de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, traería como efecto que se ordenara a la responsable reparar la omisión del acuerdo impugnado, mediante la inclusión de una disposición menos rígida. Con lo anterior, **se le daría efectos generales a la ejecutoria**, ya que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación, lo que **pugnaría con el principio de relatividad de las sentencias de amparo**.

84. De igual manera, en el fondo, la autoridad responsable señalada:

85. -Consideró infundados los conceptos de violación del Primero al Quinto, en los cuales el quejoso en esencia, refirió que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, vulneran sus derechos humanos relativos a la propia imagen, libertad individual, intimidad, inherente al libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, disposición de la salud personal, autodeterminación personal y corporal.

86. -Finalmente estimó que era inoperante el Sexto concepto de violación, en tanto que los artículos señalados por el quejoso como actos reclamados no se refieren a tipos penales en materia de delitos contra la salud, sino a regulaciones de carácter meramente administrativo relativas a la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes y psicotrópicos.

87. **4.2.3.- Informe justificado rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado de Autorización Sanitaria.** Dicha autoridad externó, en esencia, las siguientes consideraciones dentro de su informe justificado:

88. -Como cuestión previa, reconoció la emisión del oficio impugnado de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, pero rechazó los actos consistentes en la aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 234, 235, 237, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

89. -En cuanto a los motivos de improcedencia y sobreseimiento, hizo valer los siguientes:

90. -Primero.- Respecto de los **actos que fueron negados**, estimó que se actualizaba la causal de sobreseimiento consignada en la **fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo**, pues el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa.

91. -Segundo.- Consideró que se debía decretar el **sobreseimiento** de la instancia, a razón de no haberse agotado las instancias pertinentes, es decir, no agotar el **principio de definitividad**, aunado a que los argumentos de la quejosa versaron en torno al contenido de la Ley General de Salud y no del acto de autoridad.

92. -Agregó que la entonces parte quejosa no agotó el principio de definitividad, aunado a que pretendió justificar una violación a sus derechos humanos por la negación a su solicitud, la cual se funda en la Ley General de Salud que por sí misma no permite lo que pretende la quejosa, siendo así errónea la vía del amparo de mérito, ya que el quejoso lo que pretendía impugnar es el contenido y no la aplicación de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, de lo cual dicha autoridad sólo aplicó los preceptos más no los creó.

93. -Tercero.- Alegó que resultaba improcedente el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo**, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la citada legislación ordinaria.

94. -Expresó que, de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, ello implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que **resultaría apartado del principio de relatividad**.

95. En particular, se explicó que, de concederse el amparo, ello traería como efecto que se ordenara a la responsable reparar la omisión del “Acuerdo” impugnado por este medio, mediante la inclusión de una disposición menos rígida. Con lo anterior, señaló que **se le darían efectos generales a la ejecutoria**, ya que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con el “Acuerdo” reformado, lo que pugnaría con el principio de relatividad enunciado.

96. En cuanto al fondo, dicha autoridad refirió lo siguiente:

97. -Consideró que eran inoperantes los conceptos de violación PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, por guardar relación entre sí, en donde la parte quejosa se dolía de la aplicación por parte de la autoridad sanitaria, en su perjuicio, de los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que dicha quejosa señaló vulneraban los derechos de la dignidad humana e identidad personal; derecho a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana; derecho a la disposición de la salud personal; derecho a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y a la dignidad humana; transgresión de los exámenes de proporcionalidad

y escrutinio formulados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para las normas que restringen derechos humanos.

98. -Manifestó que dichos conceptos de violación resultaban inoperantes, ya que no expresó la quejosa en sus conceptos de violación, argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones del acto de autoridad, ya que no hizo razonamiento la quejosa respecto de la indebida fundamentación o motivación, y solamente señaló que la existencia de tales violaciones al procedimiento que le vulneraban derechos, dando lugar a conceptos de violación inoperantes.

99. -Dijo que eran infundados los conceptos de violación, en los cuales el quejoso, en esencia, refirió que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, vulneraban sus derechos humanos relativos a la propia imagen, libertad individual, intimidad, inherente al libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, disposición de la salud personal, autodeterminación personal y corporal.

100. -Asimismo, estimó inoperante el Sexto concepto de violación, en tanto que como se expuso, los artículos señalados por los quejosos como actos reclamados, no se referían a tipos penales en materia de delitos contra la salud, sino a regulaciones de carácter meramente administrativo relativas a la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes y psicotrópicos.

101. -Concluyó la autoridad, que resultaba imposible analizar la constitucionalidad de la criminalización del consumo de marihuana, como pretendía el recurrente, pues los artículos que contienen **los tipos penales en cuestión no fueron aplicados en la resolución administrativa reclamada.**

102. **4.2.4.- Informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.** Dicha autoridad externó, en esencia, las siguientes consideraciones dentro de su informe justificado:

103. -Aceptó como cierto el acto reclamado a dicha autoridad responsable respecto de la Ley General de Salud, en específico, los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479; no obstante, señaló que la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito, no causaba afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en ese Cuerpo Colegiado, no derivaba necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos del amparista.

104. -Estimó que el daño que reclamó la parte impetrante del amparo se atribuía a un acto de ejecución posterior, mismo que no reconoció como propio y consideró totalmente independiente del ámbito de facultades y atribuciones de dicha autoridad del Poder Legislativo Federal, por lo que debería negarse el beneficio del amparo y protección constitucional a favor del promotor del amparo.

105. -Alegó que el ordenamiento impugnado por la parte quejosa, resultaba de eficiente y perfecta validez por cuanto se efectuó mediante el proceso legislativo que establece el artículo 72 de la propia Ley Fundamental.

106. -Concluyó señalando que en todas las actuaciones que dieron pie al Decreto en cuestión, siempre se ajustó a Derecho tanto en procedimientos como en forma legislativa; en tal virtud, afirmó que la aprobación del ordenamiento de referencia siempre se hizo bajo el imperio de la legalidad.

107. **4.3.- Consideraciones del Juez de Distrito.**

El Juez de Distrito del conocimiento, basó su resolución (en esencia), en las siguientes consideraciones:

108. En primer término, el Juez de Distrito destacó su competencia legal para conocer y resolver el asunto, y luego precisó que los actos reclamados consistían en la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular, de los **artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368**, así como su respectiva aplicación a través del oficio de doce de noviembre de dos mil quince.

109. Después, el juez se pronunció sobre la certeza de los actos reclamados, los cuales se tuvieron por ciertos.

110. Posteriormente, de oficio, el juez advirtió del escrito inicial de demanda, que si bien el peticionario del amparo señaló como acto reclamado destacando la **orden de publicación** de la Ley General de Salud; lo cierto es que omitió expresar argumento alguno que tuviera por objeto controvertir tal acto.

111. Así, considerando que si no se atribuyeron vicios propios al acto reclamado consistente en la **orden de publicación** de la Ley General de Salud, esto es, no se formularon conceptos de violación a fin de demostrar la inconstitucionalidad de dicha etapa legislativa, era inconcuso que se surtía la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo **61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, todos de la Ley de Amparo**. Así, se determinó **sobreseer** en el juicio por cuanto hace al acto consistente en la **orden de publicación de la Ley General de Salud, atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos**.

112. Asimismo, el juzgado federal advirtió, de oficio, que respecto del **artículo 479 de la Ley General de Salud**, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo**, en virtud de que **la parte quejosa no acreditó la existencia del primer acto concreto de aplicación** del referido numeral.

113. Con base en ello, se aclaró que **no serían motivo de análisis los argumentos planteados en el Sexto concepto de violación** de la demanda respectiva, el cual se titula: ***“LA PENALIZACIÓN DEL AUTOCONSUMO DE MARIGUANA TRANSGREDE LA FINALIDAD OBJETIVA DEL DERECHO PENAL Y VULNERA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y CORPORAL”***, en el cual la quejosa refiere a la finalidad objetiva del régimen jurídico y a los límites deontológicos del derecho penal, para concluir que el autoconsumo de la marihuana es una conducta privada fuera del campo del derecho penal en la medida en que no perturba a la sociedad en general ni frente a terceros.

114. Al efecto, el Juez de Distrito del conocimiento, explicó lo siguiente:

*“Se expone tal aserto, en virtud de que con los mencionados planteamientos, **la parte quejosa pretende combatir la penalización del autoconsumo de marihuana** por considerar que transgrede la finalidad objetiva del derecho penal y vulnera la libertad individual y corporal, toda vez que a su parecer es una cuestión que no entra en el campo del derecho penal, sino que se trata de una actividad, en todo caso, meramente moral, por lo que el Estado excedió sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos al penalizar el autoconsumo de marihuana; así como que se transgrede el principio de proporcionalidad penal e intervención mínima del Estado, ya que para que éste tenga la posibilidad de sancionar una conducta debe afectarse un bien jurídico, concluyendo que la política prohibicionista, transgrede los principios de proporcionalidad penal y mínima intervención del Estado, ya que éste puede proteger la salud individual de los particulares, sin prohibir a quien deliberadamente y con pleno conocimiento de causa decida consumir cannabis, aunado a que es contrario al principio de proporcionalidad, porque tipifica el uso de la conducta, no obstante que no se lesiona ningún bien jurídico sino que sirve para protegerlo.*”

En la especie, como se advierte de lo anterior, el motivo de inconformidad aducido por el quejoso se encuentra encaminado a controvertir la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan el consumo y otros actos relacionados con la marihuana, previstos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal,¹⁶ así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud,¹⁷ por lo que

¹⁶ **Código Penal Federal:**

“Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;

[...].”

“Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código”.

“Artículo 195 bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”.

“Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.

Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia”.

¹⁷ **Ley General de Salud:**

“Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

[...].”

“Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”.

“Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder”.

es dable concluir que la respuesta emitida por la autoridad administrativa no guarda relación alguna con la existencia de una conducta delictiva o la posibilidad de considerar que se actualizo la posesión del narcótico; de ahí que no se actualice la aplicación en perjuicio del quejoso”.

115. Enseguida, el Juez de Distrito analizó las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, estimando infundadas, las siguientes:

116. –**Inexistencia de actos** (artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo), hecha valer por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien afirmó no haber emitido acto alguno de ejecución. Lo infundado de la causal, es que al Presidente sólo le fueron reclamadas la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud.

117. –**Omisión de conceptos de violación con relación a la promulgación de la Ley General de Salud** (artículos 61, fracción XXIII, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108, fracción VIII de la propia ley). Esta causal fue hecha valer por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y se desestimó al considerarse que el solicitante del amparo realizó una exposición de los conceptos de violación respectivos a efecto de defender sus derechos.

118. –**Violación al principio de relatividad de la sentencia de amparo** (artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los numerales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la citada legislación), pues se alegó que el efecto de lo solicitado, desvirtuaría la voluntad del legislador cuando creó la Ley General de Salud, y que en el caso de concederse el amparo, ello tendría como efecto el ordenar a la responsable reparar la omisión de la norma impugnada, mediante la

inclusión de una norma menos rígida, lo que se traduciría en dar **efectos generales a la ejecutoria**. Esta causal, que hicieron valer el Titular del Ejecutivo Federal y el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se desestimó, pues **de otorgarse la protección constitucional, la misma únicamente sería en beneficio del quejoso, sin que se vinculare con ello a la población en general**.

119. –**Inexistencia de aplicación** en perjuicio del quejoso de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud (Artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo), lo que se desestimó al considerarse que **los artículos impugnados se controvirtieron como un sistema normativo**, sin que sea obstáculo a ello el que, por ejemplo, el numeral 234 de la Ley General de Salud, no se invocare de manera destacada en el oficio *****. Esta causal se invocó por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

120. –**Falta de definitividad del acto** (Artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo), ya que se argumentó por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que la negativa de autorización, podía recurrirse mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta causal se desestimó al considerarse que **el principio de definitividad no es absoluto y admite excepciones, entre ellas, la referente a la impugnación de leyes** con motivo del primer acto de aplicación.

121. Hecho lo anterior, el juez del conocimiento procedió al examen de los conceptos de violación, reiterando que la parte quejosa reclamaba la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular los **artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368**, con motivo del primer acto de aplicación, mismo que se hizo consistir en el **oficio de doce de noviembre de dos mil quince**, signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, se comunicó a la parte quejosa que no podía serle expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas); así como Tetrahidrocannabinol (THC).

122. Al respecto, se precisó que de las constancias que integraban el juicio de amparo se advertía la existencia del oficio de doce de noviembre de dos mil quince, en el que se aplicaron los preceptos reclamados; el que constituía el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, al no advertirse que existía alguno previo en su perjuicio.

123. Luego, se refirió que antes de abordar el análisis de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, convenía realizar una reflexión sobre los temas medulares que el impetrante de garantías señaló en el escrito de demanda, siendo esos temas: “El derecho a la salud y la dignidad humana”, y en tal propósito, se efectuó un examen al marco constitucional, así como al marco jurídico internacional y a la doctrina respectiva.

124. Con base en todo lo anterior, se concluyó que eran infundados los conceptos de violación, y, por tanto, se determinó que debían negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra de los preceptos legales reclamados, negativa que debía hacerse extensiva

respecto de su acto concreto de aplicación, en virtud de que dicho acto no se atacó por vicios propios, sino como una consecuencia directa de la aplicación de las normas impugnadas.

125. Del fallo en cuestión, destacan las siguientes consideraciones:

*“... Así, del análisis del referido contexto constitucional y convencional, es posible advertir que normativamente se ha considerado que la conducta consistente en el consumo de marihuana y tetrahidrocannabinol (THC), **puede afectar gravemente a la salud de las personas, tanto por su afectación a la salud mental como por la posibilidad de generar farmacodependencia**, ya que como deriva de lo previsto en la Ley General de Salud, y se corrobora con lo manifestado por la parte quejosa, **debe distinguirse entre la afectación momentánea que genera esa conducta y la diversa que se puede generar por el uso reiterado de estupefacientes y psicotrópicos.***

*En efecto, como lo precisa a lo largo de su demanda de amparo, especialmente en su quinto concepto de violación, la parte quejosa reconoce y reitera que el consumo de cannabis **genera un efecto inmediato de conciencia alterada**, el cual considera no produce un daño a la salud.*

*Cabe significar que **esta afirmación de la parte quejosa viene a corroborar, que tal como lo señala la Ley General de Salud y se reconoce expresamente en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, referidos en párrafos que anteceden, el consumo de marihuana o tetrahidrocannabinol (THC) sí tiene consecuencias relevantes** tanto en forma inmediata como mediata sobre la salud de los individuos, tal como se precisa con base en un extenso análisis bibliográfico en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de noviembre de dos mil quince el amparo en revisión 237/2014, específicamente en su apartado denominado ‘afectaciones a la salud’.*

*Por tanto, el marco jurídico vigente en el Estado Mexicano es revelador de que la conducta consistente en consumir marihuana y tetrahidrocannabinol (THC), con fines lúdicos o recreativos implica una afectación al derecho a la salud de quienes realizan el consumo de esas sustancias; tanto por su consumo ocasional, dado que los efectos inmediatos que puede generar, conllevan una afectación a la dignidad de las personas que lo consumen al provocarles, un estado de alteración que en mayor o menor medida **puede afectar su conducta**, como por su consumo continuo, al provocar farmacodependencia; incluso, en virtud de esos efectos sobre el consumidor de esas sustancias, **la conducta en comento, también constituye un riesgo para la eficacia de los derechos***

fundamentales de las diversas personas con las que entablan relaciones, e incluso para la sociedad en general.

*Al respecto, conviene recordar que el derecho a la protección de la salud, reconocido en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional de individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado **bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social** de la persona, que deriva de un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

Incluso, es importante precisar que el derecho a la salud es un derecho complejo que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones, necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

En ese orden, debe estimarse que la prohibición contenida en las normas impugnadas constituye, incluso, una medida adoptada por el Estado Mexicano para garantizar los derechos humanos de las personas, en primer lugar, el derecho a la salud y a la dignidad de los individuos evitando que consuman sustancias que ponen en grave riesgo su salud mental e incluso física y emocional, y en segundo término, para que evitar que esa conducta (consumo de marihuana), constituya un riesgo para la eficacia de los derechos fundamentales de las diversas personas con las que entablan relaciones, y de la sociedad en general.

*En esa virtud, **la prohibición de la conducta consistente en consumir marihuana o tetrahidrocannabinol (THC), para fines recreativos o lúdicos, se traduce en una medida que en el marco constitucional y convencional vigente en el orden jurídico del Estado Mexicano, tiene como finalidad esencial garantizar el pleno ejercicio del derecho a la dignidad y a la salud de los individuos, más allá de su trascendencia a la protección de la salud pública**, por lo que puede considerarse como una expresión del mandato establecido en el párrafo tercero del artículo 1º constitucional en el sentido de que ‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad’, en tanto que al impedir que se realice la conducta de mérito se logra que el ser humano logre un mayor nivel de salud física, mental y emocional, como lo sostienen los órganos que en ejercicio de su competencia constitucional emitieron la regulación referida.*

Incluso, dicha prohibición encuentra estrecha relación con la obligación establecida en el artículo 1º, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado

*Mexicano debe garantizar a toda persona el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ese instrumento internacional, ya que en primer lugar, ofrece una elevada tutela normativa a la salud de las personas en virtud de los daños a su salud y a su dignidad, con motivo del consumo de los referidos estupefacientes y, en segundo lugar, sienta las bases para **reducir los riesgos que generan para las demás personas la conducta que puede asumir quien ve alterada su salud con motivo del consumo de esas sustancias**, en la inteligencia de que **el deber de garantizar la eficacia de los derechos humanos de las personas incluye el de prevenir la realización de conductas de particulares que impliquen la violación de los derechos de terceros**, lo que incluye medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, que promueven la salvaguarda de esas prerrogativas fundamentales.*

*En este segundo aspecto, dada la afectación que el consumo de los referidos estupefacientes y psicotrópico generan para la salud, atendiendo a lo sostenido por los órganos emisores de la normativa impugnada, y de los diversos tratados internacionales a los que se ha hecho referencia, también debe tomarse en cuenta que **los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de autodeterminación y a la identidad personal se encuentran delimitados por los derechos humanos que asisten a los terceros que pueden verse afectados por la conducta que desarrollen aquéllos con motivo del consumo de esos narcóticos**, atendiendo al principio de interdependencia que existe entre todas esas prerrogativas, como se advierte de lo previsto en el artículo 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí que **dentro de esos derechos humanos no encuentran cabida las conductas que con independencia de afectar o no los derechos de quien las pretende realizar, implican un grave riesgo para la eficacia de los derechos humanos de otras personas.***

Por ende, si quien consume marihuana o THC sufre una alteración temporal que, entre otras consecuencias, se traduce en una reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, y con motivo de su consumo continuo probablemente genere una adicción, debe estimarse que, en adición a los argumentos expresados sobre la afectación a la salud y a la dignidad de los consumidores de esas sustancias, la referida conducta también conlleva un riesgo considerable para terceros, por lo que se trata de conductas que por su afectación a los derechos humanos de quien las realiza y de terceros, obligan al Estado a adoptar diversas medidas para evitar su desarrollo.

Es así, pues por ejemplo en el estudio de la Doctora Nora D. Volkow, Directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos de América, se señala que dado que la marihuana perjudica la memoria a corto plazo, el juicio y distorsiona las

percepciones, su uso puede perjudicar el rendimiento académico o laboral, e incluso hacer que sea peligroso conducir un automóvil.¹⁸

Por lo expuesto, se estima que en el caso de la prohibición de la conducta consistente en el consumo de marihuana o THC con fines recreativos o lúdicos, los órganos del Estado Mexicano que han establecido la regulación materia de análisis, sí han expresado razones suficientes para determinar que esa conducta dada su afectación a la dignidad y a la salud de quien pretende realizarla, así como a la eficacia de los derechos humanos de terceros, se encuentra fuera del ámbito de tutela de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de autodeterminación y del derecho a la identidad personal.

Incluso, tomando en cuenta el referido alcance del derecho a la protección a la salud reconocido en el artículo 4º, párrafo quinto, constitucional, tampoco puede sostenerse válidamente que la prohibición en comento lo transgrede, pues aun suponiendo que ese derecho fundamental tuviera una expresión que permita disponer de la salud personal para no gozar de buena salud, lo cierto es que dentro de esa prerrogativa no podría encuadrarse la consistente en realizar conductas que colocan a los individuos en una situación de riesgo para la eficacia de los derechos humanos de las personas con las que necesariamente se interrelacionan, y de la sociedad en general.

En efecto, si bien a decir del quejoso la salud es una cuestión que no incumbe a nadie más que al propio individuo, lo cierto es que el Estado tiene la obligación de proporcionar a toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como de las adicciones y la lucha contra ellas, no sólo a un individuo en particular como lo sostiene el impetrante de amparo, sino a la población en general, pues el hecho de que éste no desee tener un nivel de vida acorde a lo que el derecho nacional como internacional considera como saludable, no significa que se esté coartando su derecho de elegir lo que considere mejor para su desarrollo de la personalidad o su autodeterminación, sino únicamente el Estado cumple con la obligación constitucional y legal que le atañe, esto es, la protección del derecho a la salud de todos los individuos, esto es, de la sociedad en general.

En este orden de ideas, no existe violación al principio de autodeterminación, porque se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz los derechos de los gobernados, como resulta ser en la especie el de la dignidad humana, e incluso el de la salud, de la población en general.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los

¹⁸ Doctora Nora D. Volkow "La marihuana" Serie de reportes de investigación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, consultable página 16 del documento visible en la página de internet https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/mj_rr_sp_9_2015.pdf, página 1.

governados, entonces, no sería justificada la prohibición contenida en los mismos, trátase de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que **la protección de la dignidad humana y la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de dicha limitación**; así, la dignidad humana está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio, en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, dentro de los cuales no se encuentra el consumo de los psicotrópicos, por lo que la protección de tal conducta como derecho pondría en peligro los derechos humanos de terceros, por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos, como los que las previsiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Además, cabe recordar que el Estado tiene **la obligación positiva** de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la dignidad humana en relación con el diverso de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y el quejoso pretende defender sus derechos en su **aspecto negativo**, aunado a que el consumo de marihuana no es un derecho fundamental; de ahí que **la restricción contenida en los artículos tildados de inconstitucionales debe considerarse constitucionalmente válida**, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos; de modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre, sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, y evitar en gran medida los efectos o consecuencias negativas que provoca el consumo de estas sustancias, como lo es la marihuana, tanto en quienes la consumen, como respecto de terceros, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general.

En efecto, **la prohibición contenida en los artículos impugnados constituye una medida instrumental legítima para proteger la vida y la salud de las personas**, evitando la proliferación de sustancias nocivas, pues el consumo indebido de psicotrópicos y estupefacientes dañan tanto a la persona que los consume como a aquellos individuos que por estar cerca de éstos –familiares o no–; a manera de ejemplo, se tiene que quienes no siendo consumidores, por estar cerca de éstos, inhalan el humo que desprende el ‘tetrahidrocannabinol’ (THC) o marihuana, se **convierten en consumidores pasivos, lo cual constituye uno de los graves problemas de la salud pública, ya que puede perjudicarse a terceros con quienes se interrelaciona el consumidor, como a la población en general**.

En este último aspecto, cabe destacar que tratándose de mujeres embarazadas, existen investigaciones como las del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, que indican que el sistema endocanabinoide del cuerpo juega un papel en el control de la maduración del cerebro, particularmente en el desarrollo de las respuestas emocionales, por lo que estar expuesto al tetrahidrocannabinol (THC) desde muy temprano en la vida, puede afectar negativamente el desarrollo del cerebro. Asimismo, investigaciones en ratas indican que el estar expuesto aun a bajas concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) en los últimos meses del embarazo, puede tener consecuencias profundas y perdurables en el cerebro y el comportamiento del bebé.¹⁹

Por tanto, es evidente que existe preocupación del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de la sociedad en general, de implementar medidas y limitaciones para evitar un daño a la sociedad.

*Lo anterior es así, ya que existen estudios que señalan que el **humo de la marihuana** acelera el ritmo cardíaco, el pasaje respiratorio se relaja y se dilata y los vasos sanguíneos de los ojos se expanden, haciendo que los ojos se vean enrojecidos,²⁰ de donde se advierte que el humo al expandirse en el aire no existe control para que sólo cause sus efectos inmediatos respecto de quienes lo inhalan directamente, sino también existe un riesgo para quienes se encuentran alrededor, pues se ha señalado que el humo de la marihuana contiene entre un cincuenta a setenta por ciento más de sustancias que causan cáncer, en relación al humo del tabaco, así como que un cigarro de marihuana puede causar el mismo daño a los pulmones que cinco cigarrillos de tabaco fumados uno detrás de otro;²¹ de ahí que tal como se precisó, la prohibición contenida en los artículos impugnados constituye una medida que pretende no sólo **contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, así como disminuir la afectación de la salud de la sociedad en general.***

Sin que este Juzgador desatienda que el quejoso sostenga que el consumo de marihuana no genera un daño a la salud sino tan sólo un riesgo de daño; porque tal afirmación se trata de una situación particular, a la cual pretende darle el carácter de general, con el fin de obtener una autorización en su beneficio; sin que en este caso se encuentre demostrado lo aducido por éste y sí, por el contrario, permitiría que gozara de una autorización que puede llegar a afectar a la salud de la población en general, lo que no es jurídicamente permisible y tampoco genera la inconstitucionalidad de la ley.

¹⁹ *Ibíd.* p. 16.

²⁰ *Ibíd.* p. 13.

²¹ Según datos de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, la cual es una corporación para el beneficio público y sin fines lucrativos que proporciona a jóvenes y adultos información basada en hechos acerca de las drogas de modo que puedan tomar decisiones informadas, consultable en la página: <http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/marijuana/the-harmful-effects.html>

Además, cabe señalar que el quejoso parte de una premisa errónea, pues considera como una derivación del derecho fundamental de libre autodeterminación, el derecho al consumo individual de cannabis, así como la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionados con el autoconsumo de marihuana; sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados está justificada constitucionalmente, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, lo han constituido como un derecho, por el contrario, tanto a nivel nacional como internacional se ha procurado disminuir y erradicar las conductas que el quejoso considera como derechos humanos; por tanto, los preceptos reclamados no resultan inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como tal, resultando inexacto que el quejoso pretenda incorporarlo, al hacerlo depender de su derecho al desarrollo de la personalidad y autodeterminación; de ahí que contrario a lo señalado por el peticionario del amparo, los artículos controvertidos no puedan analizarse para verificar si cumplen con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

Aunado a lo anterior, debe decirse que **dicha medida resulta necesaria en tanto pretende proteger los derechos no sólo del consumidor de la sustancia, sino de la sociedad en general, pues si bien uno de los efectos de la marihuana es aletargar al consumidor; lo cierto es que no debe perderse de vista que existen estudios que avalan que no es el único efecto de esa sustancia**, sino también se ha advertido que los consumidores empedernidos de marihuana manifiestan una conectividad neural atrofiada en ciertas regiones específicas del cerebro, involucradas en una amplia gama de funciones ejecutivas del cerebro como memorizar, aprender y el **autocontrol**.²²

Lo anterior denota la justificación constitucional de la medida prohibitiva, pues si bien a decir del quejoso la implementación de ésta no ha disuadido el consumo de la sustancia; lo cierto es que la finalidad de la prohibición no sólo es disminuir el consumo, sino también prevenir los riesgos para la sociedad, atendiendo a que el consumidor cuando se encuentra intoxicado o bajo los efectos de la marihuana puede incurrir en conductas que no controla o que no realiza de manera razonada.

En efecto, no debe pasar desapercibido que son diversos los efectos que produce la marihuana en la persona que la consume, pues las experiencias positivas con la marihuana no son en lo más mínimo universales,²³ dado que existen estudios que evidencian que algunos consumidores de marihuana en vez de relajación, aletargamiento y euforia, experimentan **ansiedad, miedo, desconfianza o pánico**, así como que son más comunes cuando se usan **altas dosis**, cuando **la marihuana tiene una potencia más alta**

²² Doctora Nora D. Volkow, Ob. Cit. p. 7.

²³ *Ibídem*. p. 4.

*de lo que se espera, o cuando la persona es inexperta;*²⁴ aspectos que se pretenden aminorar con la medida impugnada.

Por tanto, ante tales circunstancias, es que se justifica la medida prohibitiva impugnada, pues no debe perderse de vista que también es una obligación del Estado preservar la seguridad de la sociedad en general y un derecho de ésta, dado que si bien los efectos inmediatos de la marihuana de que se ha dado noticia, son reversibles y pudieran no representar riesgo directo para la salud del consumidor; no obstante, no puede arribarse a la misma conclusión en el sentido de que no afecten otros derechos humanos de terceros y de la sociedad en general como son la dignidad, salud, la integridad física y el orden público, dado que aun cuando dichos efectos sean reversibles o de efecto no permanente, ello no implica que el consumidor mientras se encuentre bajo los influjos de la marihuana tenga control de sí mismo, toda vez que como se ha precisado, diversos estudios afirman que puede experimentar sensaciones de pánico, irritabilidad y falta de autocontrol; de ahí que atendiendo a las conductas que puede desplegar incluso de manera involuntaria mientras se encuentra intoxicado el usuario, es que el Estado se encuentra obligado a proteger a la colectividad.

*Lo anterior se corrobora en virtud de que existen datos en relación a que el 26.8% de los usuarios adultos de drogas ilícitas, afirmó haber realizado algún delito bajo el efecto de las drogas, de los que destaca que de ellos el 11.3% lo hizo bajo el efecto de la marihuana,²⁵ lo que se corrobora con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA), en los que se reportó que en relación al consumo de drogas, el 24.3% cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia, así como que el **robo fue el delito más cometido en un 72.1%, donde la marihuana es la sustancia más reportada en un 35%**, seguida del alcohol y el tabaco;²⁶ por tanto, es evidente que se afecta a la sociedad, con los efectos negativos que tiene hacia ésta, pues incluso, en todo el mundo, la gran mayoría de los delitos relacionados con el uso de drogas tiene que ver con el cannabis.²⁷*

*Constata lo expuesto el hecho de que se tienen estudios en los que se destaca que la marihuana perjudica seriamente el juicio, la coordinación motora y la reacción temporal, y hay estudios científicos que han encontrado una relación directa entre la concentración de tetrahidrocannabinol (THC) en la sangre y la inhabilidad para conducir, así como que la marihuana es la droga ilícita más frecuentemente encontrada en exámenes de sangre de conductores que han estado involucrados en accidentes automovilísticos, incluyendo accidentes **fatales**;²⁸ de ahí que conducir drogado, pone en riesgo no sólo al*

²⁴ Ídem.

²⁵ Zamudio Ángeles, Carlos Alberto y Castillo Ortega, Lluvia, *Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México*, México, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C., 2012, p. 14.

²⁶ Encuesta Nacional de Adicciones 2011, página 5.

²⁷ Conforme al Informe Mundial Sobre las Drogas 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), página 5. Consultable en la página de internet: http://www.unodc.org/documents/wdr2014/V1403603_spanish.pdf

²⁸ Doctora Nora D. Volkow, Ob. Cit. p. 5.

conductor, sino también a los pasajeros y a la sociedad en general, y en particular a quienes usan las vialidades, llámese peatones e, incluso, otros conductores que voluntariamente no son usuarios ni conducen en tal estado, pues se insiste los usuarios de la sustancia al encontrarse bajo sus influjos puede verse alterada la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio y el juicio, lo que resulta perjudicial a la sociedad en general; de ahí que se justifique la necesidad del ‘sistema de prohibición’ que prevén los preceptos reclamados.

En efecto, en el informe de la Comisión Nacional contra las Adicciones, intitulado *Análisis del Consumo de Sustancias en México*,²⁹ señaló que el tetrahidrocannabinol (THC) activa el sistema de gratificación de igual manera que lo hacen casi todas las drogas, es decir, estimulando las células cerebrales para que liberen una

EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS DEL CONSUMO DE MARIGUANA		
Agudos	Persistentes	Crónicos
Presentes durante la intoxicación	Duran mas que la intoxicación pero no siempre son permanentes	Efectos acumulativos del uso crónico
Deterioro de la memoria a corto plazo	Deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje	Adicción
Deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas	Deterioro del sueño	Aumento del riesgo de tos crónica, bronquitis aguda y crónica, cáncer broncogénico, arritmias
Deterioro de la coordinación y el equilibrio		Aumento del riesgo de esquizofrenia en personas susceptibles
Aumento en el ritmo cardíaco		Aumento del riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional
Episodios psicóticos		
Aumento del riesgo de accidentes automovilísticos al conducir bajo el efecto de la sustancia		

sustancia química llamada dopamina, que de acuerdo a sus efectos a nivel del Sistema Nervioso Central, la marihuana se clasifica como un **depresor**, así como los efectos agudos y crónicos del consumo de marihuana, como se advierte del siguiente cuadro:

En ese orden, atendiendo a las razones expuestas por los diversos órganos del Estado Mexicano dotados de las potestades normativas que constitucionalmente les sirvieron de sustento para celebrar la Convención Única sobre Estupefacientes de mil novecientos sesenta y uno, enmendada por el Protocolo de mil novecientos setenta y dos; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de mil novecientos setenta y uno, y la Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos ochenta y ocho, así como para expedir la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud, incluso tomando en cuenta los elementos que derivan del análisis bibliográfico realizado en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de noviembre de dos mil quince el amparo en revisión 237/2014, específicamente en su apartado denominado ‘afectaciones

29 Consultable en la siguiente dirección electrónica: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_mariguana.pdf

a la salud', así como las múltiples estadísticas en diversos rubros relacionados con el consumo de la marihuana, se estima que la conducta consistente en el consumo de marihuana o cannabis y de tetrahidrocannabinol (THC), conlleva una relevante afectación a la salud de los individuos que la realizan e incluso afecta su dignidad; además, **genera un riesgo considerable para la eficacia de los derechos humanos de terceros**, por lo que dicha conducta no se encuentra tutelada por los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de autodeterminación, menos aún por el derecho a la libre identidad personal o el derecho a la protección a la salud, conforme al alcance de estos derechos humanos en el orden constitucional del Estado Mexicano y, por ende, estas prerrogativas fundamentales no resultan vulneradas por lo previsto en los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último y 248 de la Ley General de Salud de la Ley General de Salud.

Como sustento a esta conclusión, de especial relevancia resulta señalar que en principio, la valoración sobre las consecuencias que una determinada conducta tiene sobre los derechos humanos de las personas corresponde al legislador y a los órganos dotados de las potestades normativas necesarias para celebrar tratados internacionales, por lo que si, como sucede en el caso de la prohibición impugnada, del marco jurídico convencional y legal se advierte que los órganos constitucionalmente facultados para emitir el contexto normativo que prohíbe una conducta, han sustentado su determinación en la afectación que ésta provoca en la salud de las personas que realicen esa conducta e, incluso, en los riesgos que implica para la eficacia de los derechos humanos de terceros, ello provoca que en deferencia a su posición constitucional y a los principios de presunción de validez de la actuación legislativa y de buena fe, que rigen la actuación de esos órganos del Estado, en el juzgamiento constitucional de esa prohibición se aborde el análisis respectivo a partir de la valoración realizada por esos órganos, sin que ello obste para que quienes controviertan esa prohibición se encuentren en posibilidad de ofrecer medios de prueba cuyo desahogo dé lugar a desvirtuar la existencia de esa afectación a la salud o, cuando menos, brinden al juzgador de amparo los elementos suficientes para que estime necesario ejercer la atribución para ordenar el desahogo de pruebas que juzgue convenientes para arribar a una convicción diversa a la que deriva de lo manifestado por los órganos que establecieron la prohibición impugnada, atribución para ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer que se prevé en el artículo 79, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo al tenor del diverso 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Ante ello, si bien la parte quejosa refiere que la conducta prohibida en la normativa impugnada es inconstitucional en tanto que conforme a estudios científicos el consumo de cannabis no genera un daño inmediato a la salud, sino el riesgo de que posteriormente se generen daños a la salud; lo cierto es que para sostener esa afirmación y desvirtuar las razones expresadas por los diversos órganos del Estado Mexicano que han establecido la normativa referida, la quejosa no ofreció prueba alguna encaminada a demostrar

su dicho; incluso si bien refiere a un estudio realizado por la Fundación Beckley, el cual no obra en autos, lo cierto es que de lo referido por la quejosa no se advierte que se trate de un estudio desarrollado con un enfoque científico y que de manera integral, en la realidad social y económica de la población del Estado Mexicano, demuestre que el consumo de marihuana y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos o lúdicos no genera una afectación a los derechos humanos tanto de quien realiza esa conducta como de las personas con las que se interrelaciona, es decir, de terceros y de la sociedad en general.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro: ‘CONTROL DEL TABACO. LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA ES UN MEDIO DE CONVICCIÓN CONDUCENTE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE CONTROVIERTA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ORDENAMIENTOS QUE REGULAN DICHA MATERIA, SI SU FINALIDAD ES DEMOSTRAR CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA MÉDICA SOBRE TEMAS RELATIVOS A LAS CONSECUENCIAS EN EL SER HUMANO POR EL CONSUMO DIRECTO E INDIRECTO DEL MENCIONADO PRODUCTO, ASÍ COMO LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD’.³⁰

*En ese tenor, se puede afirmar que el Estado tiene la **obligación positiva** de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho humano a la dignidad humana y a la salud, esto es, el Estado tiene la obligación de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, tal protección supone la **obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud y establecer limitantes que protejan los derechos de terceros**, concretamente los de la*

³⁰ El texto de la mencionada tesis es del tenor siguiente: “El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho fundamental a la protección de la salud, el cual involucra la creación de normas jurídicas y la implantación de medidas administrativas con el objeto de poner en práctica programas gubernamentales con aspiraciones concretas sobre su efectivo ejercicio, para lo cual se confieren atribuciones a los órganos estatales en distintos ordenamientos legislativos, por ejemplo, respecto del control del consumo e inhalación de productos del tabaco, así como de la divulgación de información sanitaria para el fomento a la educación sobre la prevención de enfermedades originadas por esas actividades, adoptadas por los particulares intencional o involuntariamente. Por otra parte, el Constituyente empleó un concepto jurídico indeterminado al introducir en el texto del citado precepto el vocablo ‘salud’, además de haber establecido un principio programático vinculado con la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de las personas. En esas condiciones, la prueba pericial médica es un medio de convicción conducente en el juicio de amparo indirecto en que se controvierta la constitucionalidad de ordenamientos que regulan el control del tabaco, cuando su finalidad sea demostrar cuestiones relacionadas con la ciencia médica sobre temas relativos a las consecuencias en el ser humano por el consumo directo e indirecto del tabaco, este último, a través de la inhalación del humo originado por la combustión del mencionado producto por terceros, así como la efectividad de las políticas públicas para la salvaguarda del referido derecho. Lo anterior se justifica por la necesidad de darle contenido al mandato constitucional, a través de la incorporación al juicio de garantías de la información que permita al juzgador adoptar la decisión que resuelva el conflicto sometido a su consideración con apoyo en la opinión de especialistas y verificar la eficacia de las comentadas políticas estatales”. (Registro: 167543. Época: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.7o.A.620 A. Página: 1873).

población en general y/o los miembros que conforman la sociedad, lo que se traduce en evitar que conductas de particulares, grupos o empresas la dañen.

No pasa inadvertido que el quejoso refiere que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por el quejoso, habida cuenta que al juzgador constitucional no le corresponde dilucidar si existen otras opciones más idóneas para alcanzar la finalidad pretendida con la normatividad reclamada, sino únicamente verificar que ésta cumpla con los presupuestos constitucionales.

Se expone tal aserto, pues no es la función del juzgador constitucional implementar la política pública a seguir entorno al uso lúdico o recreativo de la marihuana, sino verificar si tiene asidero constitucional su restricción en la actualidad.

Tampoco pasa desapercibido que señala que podrían implementarse medidas alternativas para proteger la salud y el orden público que intervienen su derecho fundamental, en un grado menor; no obstante, en autos no obran los elementos técnicos y científicos para determinar cuáles son esas condiciones y esos términos, aunado a que los órganos jurisdiccionales no cuentan con la atribución de implementar políticas públicas a través de una sentencia, respecto del consumo de sustancias como lo es el estupefaciente cannabis sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), o bien, el psicotrópico ‘tetrahidrocannabinol’ (THC), los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas, dado que no se encuentra dentro de sus atribuciones; además que para la implementación de políticas públicas dirigidas a la protección de la salud, requiere de elementos técnicos, científicos e incluso estadísticos, que no compete al juzgador realizar, a fin de instituir y dar seguimiento a medidas, programas y políticas públicas, con el objeto de asegurar que el usuario ejerza su propia voluntad respecto del consumo de la marihuana, así como para garantizar a la sociedad que el consumidor en tanto se encuentra bajo los efectos de la droga, tenga conciencia de dichas medidas y más aún que las respete.

En los mismos términos, lo manifestado en la demanda materia de análisis en cuanto a que la prohibición impugnada no permite alcanzar sus fines en tanto que conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones dos mil once el consumo de la marihuana a nivel nacional entre adultos de entre 18 y 34 años ha aumentado de 1% de la población en el año dos mil a 1.9% de la población en el dos mil once; de ninguna manera permite concluir que la conducta prohibida en la normativa impugnada, se encuentre tutelada por los derechos humanos que estima violados, incluso, el referido dato tampoco es

revelador de que la política respectiva no cumple con sus fines, pues por una parte, en el período referido la población del Estado Mexicano creció en una mayor proporción, de noventa y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos doce (97,483,412) en el año dos mil a ciento doce millones trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho (112,336,538) en el año dos mil diez, según los datos derivados del Censo de Población y Vivienda de dos mil diez, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que representa un crecimiento del 15.23 % de la población en el mismo período, lo que de suyo es revelador de que en términos reales, atendiendo al incremento de la población, el consumo del referido estupefaciente se ha reducido considerablemente.

Aún más, en el supuesto de que la prohibición en comento no surtiera sus efectos a plenitud, de ello tampoco podría derivar su inconstitucionalidad en la medida en que su finalidad esencial es impedir la comisión de una conducta violatoria de los derechos humanos de quienes la cometen y de las personas que se interrelacionan con ellos, así como de la población en general; en todo caso, sería reveladora de la necesidad de que el Estado adopte medidas complementarias para disminuir la producción y consumo de marihuana y de tetrahidrocannabinol (THC), todo ello enmarcado en el principio de progresividad en el goce de los derechos humanos.

*Cabe agregar que **las conclusiones alcanzadas implican que la conducta prohibida por los artículos impugnados, no se encuentra tutelada por los derechos humanos que se estiman violados en la demanda materia de estudio** y, por ende, no se está en presencia de una restricción a esas prerrogativas fundamentales, por lo que su validez no está sujeta al cumplimiento del juicio de proporcionalidad que propone la parte quejosa.*

Resulta conveniente señalar, a mayor abundamiento, que aun cuando pudiera realizarse la referida conducta en determinadas condiciones y con una periodicidad prudente que diera lugar a no afectar de manera considerable la salud de los consumidores de marihuana o tetrahidrocannabinol (THC), o a no poner en riesgo los derechos humanos de terceros, o bien pudieran establecerse por el legislador y por las diversas autoridades del Estado Mexicano diferentes medidas que en su conjunto pudieran alcanzar ese objetivo; lo cierto es que, por una parte, en autos no obran los elementos técnicos y científicos para determinar cuáles son esas condiciones y esos términos, lo que impide considerar a la normativa impugnada como sobreinclusiva y, además, el marco jurídico vigente ni la realidad fáctica permite advertir la existencia de esas medidas, por lo que resulta discutible declarar la inconstitucionalidad de una prohibición, encaminada a proteger la dignidad y los derechos humanos por la posibilidad de que existan otras opciones que afecten menos a una conducta que no es, en términos generales, una expresión de prerrogativas fundamentales, pronunciando este último que no implica reconocer que el consumo de marihuana y tetrahidrocannabinol (THC) sea una conducta tutelada por los derechos humanos cuya violación aduce el quejoso, sino la posibilidad

de que quienes enfrentan un problema de farmacodependencia cuenten con las posibilidades para realizar esa conducta en la medida estrictamente necesaria.

Finalmente, importa destacar que lo sostenido en este fallo no desconoce el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de noviembre de dos mil quince el amparo en revisión 237/2014, el cual constituye un relevante criterio aislado, que no es obligatorio en términos de los artículos 216, 217 y 222 de la Ley de Amparo, por lo que respetuosamente no se coincide únicamente en su premisa relativa a considerar que el derecho al libre desarrollo a la personalidad tutela la conducta consistente en consumir marihuana o tetrahidrocannabinol (THC) con fines lúdicos o recreativos, pero que no obstante lo anterior brinda elementos valiosos para emprender el respectivo análisis de constitucionalidad y arribar a una conclusión por demás razonable.

Así, la prohibición contenida en los artículos 234, 235, 237, 245, 247 y 368 de la Ley General de Salud está muy lejos de recaer sobre el centro o núcleo del derecho a elegir y desempeñar lo que cada individuo puede hacer con su vida, pues la restricción legislativa no es una restricción de entrada, esto es, no condiciona la posibilidad de disponer del propio cuerpo y de decidir qué hacer con él, sino que simplemente regula algunas de sus condiciones de ejercicio, lo cual se traduce en un impacto objetivamente mínimo sobre el ámbito de ejercicio del derecho o libertad en cuestión; por tanto, resultan **infundados** los conceptos de violación en estudio, en virtud de que el Estado no lleva acciones tendentes a socavar o suprimir la identidad personal del individuo, puesto que su interés es preservar el derecho a la salud de la población en general, lo cual es de interés superior al de cualquier particular que decida sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa (marihuana), para fines lúdicos o recreativos.

Cabe significar que el presente fallo versa única y exclusivamente sobre el **uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa (marihuana), para fines lúdicos o recreativos; pero no prejuzga sobre el uso medicinal o científico o alguna otra política pública que pretenda implementar el Estado.**

En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, **lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal** solicitado en contra de los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil quince, en particular los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368.

Determinación que procede hacerse extensiva respecto de la aplicación de los ordenamientos referidos, en virtud de que la negativa para expedir la autorización solicitada por el quejoso para

consumir el estupefaciente cannabis sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como el psicotrópico 'tetrahidrocannabinol' (THC), los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente 'marihuana o cannabis', específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico o personal de marihuana; decretada por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, no se atacó por vicios propios, sino como una consecuencia directa de la aplicación de la norma tildada de inconstitucional...".

126. **4.4.- Agravios en la Revisión Principal.** En los agravios que hace valer la revisionista principal (quejosa), en esencia, se refiere lo siguiente:

127. **Primero. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación a los derechos humanos a la identidad personal y a la dignidad humana:**

128. -Expresa que en la sentencia de amparo, el Juez de Distrito transgredió los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

129. -Aduce que el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos en la demanda ya que **no realizó pronunciamiento alguno en**

relación con la violación al derecho de identidad personal, sino que su estudio se limitó al derecho a la salud.

130. -Infiere que se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan el derecho a la identidad personal.

131. -Manifiesta que **el Juez de Distrito omitió realizar este análisis de proporcionalidad** de los artículos reclamados, a la luz del derecho a la identidad personal.

132. **Segundo. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación a los derechos humanos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana:**

133. -Argumenta que existió violación a las disposiciones de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; e inobservancia de las garantías constitucionales a la **tutela judicial efectiva, debida fundamentación y motivación, legalidad y seguridad jurídica.**

134. -Arguye que en la demanda de amparo, se sostuvo que la aplicación en su perjuicio de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud), **vulnera los derechos a la personalidad**, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la

intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana.

135. -Manifiesta que, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el ahora recurrente, puesto que **no realizó estudio ni pronunciamiento alguno en relación con la violación a los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.**

136. -Estima que, si se resolviera que la prohibición de sembrar, transportar y auto consumir marihuana es constitucional, tal parecería que la ventaja y derecho de disponer sobre el cuerpo propio sólo se conferiría a quienes ejercen los derechos en la forma y términos que los órganos del Estado mejor lo consideran.

137. -Aduce que los artículos impugnados de la Ley General de Salud expresan que no se puede utilizar el cuerpo y la imagen para las metas y objetivos que uno considera relevantes; que no se puede disponer de forma libre y autónoma de la persona, y que el disidente y el opositor deben ser perseguidos penalmente.

138. -Señala que sólo bajo la plataforma del respeto al libre desarrollo de la personalidad es que se puede proteger la singularidad de todos los seres humanos. El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre, informada y responsable su proyecto de vida, así como la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.

139. -Infiere que es suficiente manifestar que, si el recurrente pretende individualizarse y proyectar una imagen hacia terceros, de una persona que a consciencia y deliberadamente consume Cannabis, el Estado no puede restringir tal proyección de sí mismo, salvo que hubiere violaciones a derechos de terceros (lo que no sucede en el caso

concreto). Esto es, la política prohibicionista **viola el derecho a la propia imagen**, toda vez que establece una injerencia extraña en la imagen de sí mismo que pretende mostrar.

140. -Por otro lado, dice que no obstante que en la demanda se llevó a cabo un análisis jurídico exhaustivo de las razones por las que se violaba el derecho a los derechos de la personalidad, **el Juez de Distrito se limita a negar el que la política prohibicionista viole los derechos invocados o imponga coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.**

141. -Considera que negar sin más ni más que tenga razón sin formular juicio alguno que desvirtúe los argumentos formulados, deja en evidencia que se **omite dar respuesta a la demanda de amparo.**

142. -Estima que, **si se adujera que** los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana **no son absolutos**, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de marihuana, en los artículos **235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248**, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

143. **Tercero. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al derecho a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y de dignidad humana:**

144. -Aduce que la política prohibicionista no cumple con los estándares de escrutinio fijados por la Suprema Corte para las leyes que

transgreden derechos humanos, en el presente caso, sobre los derechos a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana.

145. -Señala que el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y se limitó a establecer que la política prohibicionista no vulneraba el derecho a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana, sin dar razones concretas al respecto.

146. -Manifiesta que la prohibición al consumo de marihuana en la Ley General de Salud es una prueba clara de la forma en que desde el poder legislativo se han impuesto sobre la persona concepciones particulares de la santidad del cuerpo humano y se ha legislado en asuntos de conciencia personal, creencias, elección y autonomía personal.

147. -Considera que toda vez que la Ley General de Salud vulnera la autonomía individual del ahora recurrente, debe ser revisado desde la óptica de un escrutinio severo. Dicha normatividad prohíbe el consumo de marihuana con el objeto de proteger la salud. Lo hace, pues considera su labor el disuadir, a su juicio, malos hábitos que pudieran afectar la salud particular del individuo. Esto es, el Estado asume que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su cuerpo, de su mente y de su persona.

148. -Arguye que los artículos impugnados de la Ley General de Salud plasman una concepción metafísica concreta sobre la integridad del cuerpo humano y de la persona. Estos artículos suponen que el cuerpo es algo sagrado que debe ser protegido de toda alteración, cambio de percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Adicionalmente, los artículos impugnados plasman la concepción que la

potestad del Estado de proteger la salud y el cuerpo humano por encima de cualquier interés o derecho humano.

149. -Expresa que la obligación del Estado para defender la salud no está exenta de la confrontación con otros valores constitucionales y con regularidad debe ceder ante otros intereses, como en el caso de la muerte con dignidad, en el caso de los derechos reproductivos, libertad de culto, cuando está en juego la autonomía, la auto-propiedad, la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad y la propia imagen.

150. -Infiere que respecto a que supuestamente el Estado tiene la obligación de proteger la salud física y mental de la población general, se trata de una afirmación gratuita del Juez de Distrito, ya que constituye una afirmación absoluta en la que no se tomaron en cuenta los argumentos sostenidos por la quejosa en el escrito de demanda, esto es, sin que se haga un estudio sobre los derechos que se aducen vulnerados, pues, en todo caso, el Juez de Distrito únicamente hace referencia al derecho a la salud.

151. -Estima que la sentencia viola en perjuicio del quejoso los **principios de congruencia y exhaustividad**, así como que cuenta con **indebida fundamentación y motivación**.

152. **Cuarto. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al derecho humano a la disposición de la salud personal:**

153. -Manifiesta que en la demanda de amparo, se sostuvo que la política prohibicionista sobre la siembra, cultivo, cosecha, preparación para el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247,

248 y 368 de la Ley General de Salud) vulnera el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud.

154. -Alega que la política prohibicionista transgredía el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la obligación del Estado de respetar las decisiones y disposición de la salud que hace cada cual sobre su propio cuerpo.

155. -Expresa que, no obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y se limitó a establecer que la política prohibicionista no vulneraba el derecho a la salud, como disposición de la salud propia.

156. -Aduce que a pesar de que todos los hombres tienen derecho a la libertad, existe un límite intrínseco al derecho, esto es, la libertad de las demás personas. Es decir, al vivir en sociedad, se deben de establecer ciertos límites en aras de que cada uno pueda gozar y ejercer dicha libertad. Así las cosas, el Estado establece normas o leyes que regulen la relación entre los hombres, para no caer en una situación de injusticia en que unos cuantos disfruten de la libertad a expensas de la libertad de otros.

157. -Dice el recurrente que no obstante la legitimidad de estas limitaciones, lo cierto es que hay una esfera del actuar de un sujeto que le corresponde únicamente a él; esto es, una esfera donde no hay afectación a ningún tercero y por lo tanto no resulta válida la intervención de nadie, ni siquiera del Estado.

158. -Considera que el Estado no puede interferir en la libertad del sujeto para controlar su salud y su cuerpo; no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia. Asimismo, el sujeto tiene un derecho a no ser sometido a tratamientos o injerencias médicas en aras de proteger su salud, si no consensa y admite las mismas.

159. -Infiere que la política que prohíbe la siembra, preparación, posesión y otras conductas relacionadas con el Cannabis vulnera el derecho a disponer sobre la salud propia, pues supone que la salud personal es una obligación y no un derecho subjetivo, el cual los particulares pueden elegir disfrutar o no.

160. -Estima que el Estado justifica la política de prohibición al consumo de las sustancias referidas, en la protección a la salud de los ciudadanos. De esta manera, actúa de una manera paternalista injustificada e incurre en un desconocimiento absoluto de la racionalidad, madurez intelectual, derechos y dignidad de sus gobernados.

161. -Señala que la prohibición es más de tipo moral que de salud pública. Esto es, el Estado busca implementar cierto tipo de ideologías y formas de vida buena que considera adecuadas, a expensas de los deseos, ideas y creencias de cada persona.

162. -Argumenta que sería legítimo también prohibir sustancias como el tabaco y el alcohol, e incluso el Estado podría decidir prohibir el consumo de azúcar porque causa diabetes; el consumo de grasa, porque causa colesterol; el consumo de cafeína porque causa dependencia, etc.

163. -Arguye que, si el Estado decide tratar a sus ciudadanos como seres que no son suficientemente racionales y maduros para tomar sus

propias decisiones sobre su cuerpo y persona, entonces podría suprimir cualquier derecho y libertad con la que cuentan e imponer exclusivamente un modelo de vida buena. Así caeríamos en el absurdo de pensar que el Estado puede suprimir el derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio o a procrear, sin mayor limitación que la coyuntura política de cada momento y la elección de las mayorías en las asambleas legislativas.

164. -Menciona que las afirmaciones del Juez de Distrito no se refieren a si el quejoso es titular del derecho a la salud; tampoco a si el derecho a la salud implica un aspecto negativo, como derecho a disponer sobre la salud personal; ni tampoco se analiza en la sentencia si la política prohibicionista transgrede tal dimensión del derecho a la salud, sino que se limita a sostener que el Estado tiene una obligación de garantizar la salud y la seguridad de terceros, sin sustento alguno. En consecuencia, la sentencia viola los principios de congruencia y externa y exhaustividad, pues omite analizar los argumentos expresados en la demanda de amparo.

165. -Afirma que el Juez de Distrito también vulneró la garantía de debida fundamentación y motivación, en lo siguiente:

166. 1.- Indebida afirmación de que la política prohibicionista es una medida que tiene como fin proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas.

167. 2.- Indebida afirmación de que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de las personas, inclusive pese a la voluntad de los beneficiarios de la política reclamada.

168. 3.- Indebida afirmación de que el consumo de la marihuana afecta a la sociedad en general.

169. **Quinto. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación a la transgresión de los exámenes de proporcionalidad y escrutinio formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las normas que restringen derechos humanos:**

170. -Aduce que siempre que una norma general restringe derechos humanos, tales normas deben ser analizadas a la luz de los exámenes de proporcionalidad y escrutinio que ha establecido este Alto Tribunal, y se expusieron las razones por las que la política prohibicionista no superaba los exámenes previamente referidos.

171. -Manifiesta que el Juez de Distrito expresamente se niega a realizar un test de proporcionalidad sobre la medida reclamada, pasando por alto los siguientes precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

172. - ***“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS”.***

173. - ***“IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA”.***

174. - ***“IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”.***

175. -Alega que no obstante lo anterior, el Juez de Distrito deja de observar los criterios de esta Suprema Corte, a pesar de que el quejoso, en el escrito de demanda, expuso los argumentos correspondientes para que el juzgador de amparo emitiera un pronunciamiento en relación con la proporcionalidad de la medida reclamada.

176. **4.5.- Agravios en la Revisión Adhesiva.** En el recurso de revisión adhesiva formulado en representación del Presidente de la República, se refirió en primer término, que procedía el sobreseimiento del juicio de amparo, con base en los siguientes motivos:

177. Primero.- Se Manifestó que de la transcripción del **Artículo 63, fracción V, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo** se obtiene que el legislador hizo la distinción para la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa, entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y aquéllas que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran irreductiblemente de un acto posterior de aplicación.

178. -Alegó que dichos artículos evidencian dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, a saber: que la disposición relativa se reclama a partir de su entrada en vigor; o bien que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, siempre y cuando en ambos casos se irrogue perjuicio al quejoso.

179. -Expresó que, en el primer supuesto, cuando se reclama la disposición normativa por su sola entrada en vigor, esto es, en su

carácter de autoaplicativa, para acreditar el interés que permita reclamar tal acto, el quejoso debe demostrar que se ubica en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, que obligue a hacer o dejar de hacer una determinada conducta, lo cual le irrogaría un perjuicio, sin que sea necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad.

180. -Señaló que conforme al criterio jurisprudencial P./J. 55/97, para distinguir cuándo se está en presencia de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, que atiende a la manera en que se producen los efectos de la disposición impugnada, ya sea que éstos se actualicen de manera inmediata, o bien que para hacerlo se requiera de algún acto o evento (condición) que origine la actualización de la norma.

181. -Adujo que cuando se reclama la ley por considerarla como autoaplicativa es necesario demostrar que los efectos de la disposición impugnada irrogan una afectación en la esfera de derechos del gobernado que se actualiza de manera inmediata a partir de su entrada en vigor.

182. -Infirió que **la disposición legal tildada de inconstitucionalidad, no vincula al accionante de garantías a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia** ya que no crea, transforma o extingue la situación concreta de derecho del quejoso, aunado de que requieren de la actualización de una condición, por lo que es permisible afirmar que el acto admitido por la responsable, tiene el **carácter de heteroaplicativo**, sin que a la fecha exista un acto concreto de aplicación.

183. -Lo anterior, lo estimó así la responsable, ya que, en su opinión, para determinar la aplicación de lo dispuesto por los preceptos normativos en cita, **resultaba indispensable que la parte quejosa**

acreditara que consume personalmente cannabis sativa, indica o mariguana, lo que deja de acreditar con prueba alguna permitida por la ley de la materia.

184. -Agregó que la impetrante de garantías exhibió copia simple del oficio *********; no obstante, en dicho documento no se aplicó el artículo 479 de la Ley General de Salud, y de la propia documental que exhibe la accionante de garantías en su escrito inicial de demanda, se advierte que no se le está aplicando en su perjuicio dicho ordenamiento legal impugnado.

185. -Consideró que dicho ordenamiento legal no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, debiéndose sobreseer en el juicio por el artículo 479 de la Ley General de Salud, al dejarse de acreditar plenamente el acto de aplicación de la norma, o bien, que el accionante sea consumidor de dicho estupefaciente.

186. -Acorde a la autoridad, corrobora lo manifestado en las líneas que anteceden, la tesis número II.3o.C.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el registro 191475 del IUS y en la página 1205, del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ***“LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN”***.

187. Segundo.- En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, todos de la Ley General de Salud, estimó que era improcedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a

los derechos de la sociedad general, así como a diversos ordenamientos legales.

188. -Argumentó que el ahora recurrente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, específicamente con el objetivo de que se ordene a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que deje de observar el contenido de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368, todos de la Ley General de Salud, y se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente “marihuana o cannabis”, específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico u personal de marihuana.

189. -Mencionó que **el amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley**, y que en caso de que el efecto de la concesión del amparo, se trate respecto de un acto de carácter negativo, como en el caso en particular, el juzgado deberá determinar con precisión los efectos del mismo, obligando a la autoridad a respetar el derecho de que se trate, en el caso en análisis, a decir del quejoso, sería el libre desarrollo de su personalidad.

190. -Infirió que no pasaba inadvertido que, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, se dejó claro que un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios, en el cual se estableció:

“En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.

Un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia Constitución prevea.

Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

191. -Arguyó que, en la Ley General de Salud, como en el Código Penal Federal, **prevalecen otras infracciones administrativas y penales que necesariamente tendrían que cometerse para que en el caso que nos ocupa, el amparo pueda surtir efectos**, pues **no existe hoy día una autorización para poseer drogas, como la cannabis, en cantidades mínimas y necesarias para el consumo personal e inmediato**, sólo puede concluirse que implícitamente se tolera o permite la adquisición ilícita del producto a consumir.

192. -Expresó que resultaba evidente que, **en el sistema penal vigente, la posesión de marihuana, aún en cantidades mínimas (hasta 5 gramos), sigue constituyendo una conducta típica de delito**, y que si bien, de acreditarse que el poseedor es farmacodependiente o consumidor, el Ministerio Público no ejercerá acción penal, ello sólo implica la existencia de una excluyente que debe probarse, pero de ninguna forma una autorización para consumir marihuana o para adquirir la misma o su semilla.

193. -Estimó que la concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por la parte ahora recurrente, en nada le beneficiaría, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de delitos ya cometidos, así como la violación a diversos ordenamientos legales administrativos, e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

194. -Manifestó que no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de marihuana, conlleva la comisión de un delito por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del propio accionante de garantías al recibir la droga o la semilla necesaria para su siembra y cosecha, e incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

195. -Agregó que ante las circunstancias expuestas, no era permisible conceder el amparo, ya que insistió, el presupuesto necesario para que pudiese, en su caso, realizar los procesos para los que se solicita el amparo, derivados de la propia demanda de amparo, consistentes expresamente en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, **implicarían necesariamente la comisión previa de uno o más de los delitos previstos en normas punitivas no impugnadas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal**, esto es así, ya que al día de hoy no se encuentra regulada la forma lícita para adquirir, importar ni acceder a la marihuana o a su semilla, y al no existir una regulación específica para uso con fines lúdicos o recreativos de marihuana, al permitir esta conducta, no se

garantiza la protección de terceros, incluida el núcleo esencial de la sociedad mexicana, la familia.

196. -Afirmó que **sólo podría sembrarse, cultivarse y cosecharse marihuana, si existe como presupuesto la obtención de una semilla de dicha planta**, a la vez que sólo podría prepararse, poseerse o transportarse la misma, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha droga, conductas que finalmente, siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas, ni por tanto, materia de análisis en el presente juicio.

197. -Agregó que **tampoco se solicitó a la autoridad sanitaria, autorización para adquirir o importar marihuana, ni menos se solicitó el suministro de la misma por parte del Estado**, lo que deriva en el hecho de que aun concediéndose el amparo para la siembra, consumo y demás efectos previstos en la sentencia, prevalece la ilicitud en el acceso a la droga que nos ocupa.

198. -Alegó que si para sembrar o realizar cualquiera de las conductas planteadas por el ahora recurrente, debe previamente cometerse un delito por él o por quienes le provean la marihuana o su semilla, e incluso infringir tratados internacionales, resultaba inconcuso que **existe un impedimento grave para la emisión de un pronunciamiento de orden constitucional**.

199. -Mencionó que el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que **las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos; y protegerlos, si procediere, en el presente asunto en caso de concederse el amparo, no quedan exentos de la comisión de un**

delito ni quién le provea la droga, ni el propio recurrente, en virtud de que no solicitó la protección del amparo para efectos de adquirir la marihuana.

200. -Infirió que como en el caso, sólo se pidió autorización administrativa para ciertos efectos relacionados con el consumo de marihuana, **quedaban excluidos de la litis de amparo factores vinculados con el comercio y adquisición de la droga,** luego entonces, es evidente que de conocerse el planteamiento que formuló el quejoso, la sentencia que se dictare, sólo podría suponer que se parte de la comisión de un delito.

201. -Arguyó que, si una persona solicita autorización para sembrar, cosechar, poseer, transportar y consumir marihuana, es de suponerse que ya cuenta con la misma o que eventualmente accederá a la misma para poder realizar dichos actos; pero si hoy día, no existe vía lícita de adquisición de la marihuana o de su semilla, luego entonces, resulta jurídicamente imposible restituir en el goce del derecho al auto consumo lúdico de la marihuana que se alega.

202. -Dijo que, en el caso, la materia para la ejecución de la sentencia dictada, es que se ordene el **otorgamiento de una autorización para el consumo de marihuana, a la que hoy, sólo puede accederse ilícitamente,** luego entonces, es de concluir que el quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues **sigue penalizada la adquisición de marihuana, así como todas las posibles vías para que acceda al narcótico o a su semilla.**

203. -Señaló que México es parte del “**Sistema Internacional de Control de Drogas**” (SICD), que se encuentra respaldado por tres tratados internacionales, a saber: La Convención Única sobre

Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

204. -Manifestó que resulta improcedente el juicio de amparo que tiene por objeto declarar inconstitucionales varios de los artículos de la Ley General de Salud, que apuntalaban la negativa de la "COFEPRIS" de emitir autorizaciones para la realización de una serie de conductas relacionadas con el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De ahí que sus efectos rebasen los fines médicos y científicos a los que alude el SICD, particularmente la Convención Única de 1961 y la Convención de Estupefacientes de 1988. Por lo tanto, es de advertir que, **de concederse el amparo al quejoso, dicha acción generará el incumplimiento de obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado Mexicano.**

205. Tercero.- En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, alegó que procedía se dictara el sobreseimiento, pues **el ahora recurrente también carece de interés jurídico/legítimo.** Ello, con fundamento en el **artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo.**

206. -Consideró lo anterior, ya que si bien la parte quejosa manifestó que se ve afectada por la actuación de la autoridad ejecutora que señala en el presente juicio de garantías, pues a su decir, con los ordenamientos legales citados, se le veda su derecho a la identidad personal, dignidad humana, autodeterminación personal y corporal, siendo que la política prohibicionista no tiene un fin legítimo y no es proporcional; sin embargo, lo cierto es que en el oficio emitido por el C.

Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, **sólo se citaron** los referidos artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, **sin que ello constituya un acto de aplicación alguno**.

207. -Resaltó que con motivo de los citados artículos de la Ley General de Salud, no se afecta la esfera jurídica/legítima de la parte quejosa, porque si bien era cierto que la parte ahora recurrente arguyó ser una persona física, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud quien pretende se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9 (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente “marihuana o cannabis”, específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte, también es cierto que **el impetrante de amparo no acredita fehacientemente con documento idóneo la afectación de su interés jurídico-legítimo**.

208. -Manifestó que de acuerdo con el sistema consagrado por la **fracción I, del artículo 107 constitucional y 73, fracción V de la Ley de la Materia, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame**, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que resulta desconocido o violado a través de algún acto de autoridad, derivado de lo cual se otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea restituido.

209. -Estimó que, en el caso, el ahora recurrente acudió al juicio de garantías reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin embargo, **no acreditó con prueba alguna que la emisión de tales ordenamientos legales le causen perjuicio o agravio alguno en su esfera de derechos fundamentales.**

210. -Afirmó que al **no existir elementos de convicción palpables e idóneos con los que la impetrante acredite de qué forma su esfera jurídica se ve afectada**, se debía sobreseer el juicio de amparo, ya que **no era suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta** que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que dicha situación se cumpla, situación que acontecía en el presente asunto.

211. -Concluyó que **no debía pasar por inadvertido que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, podía abordarse su estudio bajo un matiz distinto** que fuese generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aún ante la misma causa pero por diverso motivo, pues no podía perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, era dable e incluso obligatorio que se abordaren por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme, por lo que resultaba procedente se valorare la causal de mérito bajo los argumentos apuntados.

212. En cuanto al fondo, la autoridad responsable refirió lo siguiente:

213. -Adujo que los agravios Primero a Cuarto vertidos por la quejosa recurrente eran infundados, por lo que la determinación del A quo no podría ser modificada o revocada. Esto es así, afirmó, ya que la impetrante de garantías señaló en su recurso que:

“a) El recurrente alegó,... que eran titular del derecho a la identidad personal y la dignidad humana,..., El Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por los recurrentes y se limitó al derecho a la salud,... (sic);

b) El accionante de garantías, reitera los razonamientos que expuso en su demanda de amparo.

c) En el caso concreto,... sino que se prohíbe toda conducta relacionada con el mismo”. (Sic)

214. -Estimó que dichos argumentos eran infundados por un lado y por otro inoperantes, pues en el caso en particular efectivamente la cannabis se encuentra restringida por la ley impugnada, resaltando que las autoridades en materia de salud tomaron la medida de prohibir dicha sustancia para proteger el derecho a la salud, por lo cual debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales, como es el caso.

215. -Manifestó que tiene aplicación al respecto la Tesis 1a./J. 50/2009 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **“DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD”**.

216. -Alegó que la parte recurrente no acreditó con medio de convicción alguno lo que sostiene, es decir, que con las acciones tomadas por las responsables, contenidas en los artículos impugnados por este medio, no se protege, ni se promueve la salud de las personas, y que el uso de

dicha sustancia constituya un medio más seguro para proteger la salud de las personas, benéfico para la sociedad y menos oneroso para el sector salud.

217. -Argumentó que la quejosa omitió exhibir constancias aptas para demostrar su dicho; por consiguiente, no acreditó interés jurídico/legítimo, pues dejó de exhibir documentos idóneos que demuestren que el consumo lúdico que pretende no cause afectación a terceros.

218. -Infiere que si bien el recurrente manifestó que en caso del consumo lúdico que pretende sólo generaría un perjuicio a su persona, de ello no se sigue que efectivamente sea cierto para asumir que se ubica en el supuesto de prohibición.

219. -Dice que su situación de índole particular, en principio se considera que es una simple **expectativa de derecho de la que quisiera gozar el recurrente**, esto es consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente marihuana o cannabis, específicamente para siembra cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, sin embargo, dicho insumo no es lícito de conformidad con lo establecido en los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, por lo que el entorno jurídico del recurrente en cuanto a que no va a poder comercializar el producto que defiende por esta vía, no puede jurídicamente pretenderse que, amén al vacío legislativo, garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo y que por tanto tutele intereses particulares o individuales, esté por encima de los intereses

públicos o de la comunidad, ya que no se explica razonablemente la prerrogativa a favor de un individuo, cuando se afecte de manera notoria a la sociedad como lo evidencio el A quo, en el considerando sexto de la sentencia impugnada.

220. -Precisó que no era correcto pretender basar la inconstitucionalidad de una norma obligatoria, en **situaciones hipotéticas o particulares de la quejosa**, dada la característica de generalidad con que cuentan las leyes o normas administrativas como las que se reclaman en la especie.

221. -Señaló que si el recurrente aduce que la sentencia impugnada por este medio transgrede la garantía prevista en el artículo 14 constitucional de debido proceso legal, porque pretende la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, para lo cual solicitó autorización a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, es una **supuesta situación de autoconsumo lúdico** debido a que **ni siquiera consta en autos que el recurrente efectivamente sea un consumidor de dicho psicotrópico** (agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento), de tal suerte que resulta ser un dato incierto: luego, de ser una situación particular y propia del recurrente, no puede oponerse a la naturaleza de carácter general, abstracto e impersonal de todo ordenamiento legal, ni puede fundarse su inconstitucionalidad en circunstancias particulares como las argumentadas por la quejosa.

222. -Resaltó que las razones expuestas por la parte quejosa no se encuentran encaminadas a combatir los razonamientos establecidos por el A quo en la sentencia hoy combatida, por lo tanto, los agravios hechos

valer por quejosa deben desestimarse por inoperantes. Indicó que como ha quedado demostrado, no guardan relación alguna con las consideraciones jurídicas que sirvieron como base para determinar negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

223. -En relación con los argumentos contenidos en los agravios segundo a quinto por parte del ahora recurrente, señala que **las restricciones impuestas en la Ley General de Salud están debidamente justificadas** de conformidad con lo establecido por esta Suprema Corte en la Tesis 1a.LXVI/2008, cuyo rubro es: **“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VALIDAS”**, atendiendo a lo siguiente:

224. -1.- Son admisibles, en tanto y cuanto se dirigen a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, consagrado en el Artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el de los propios consumidores.

225. -La restricción contenida en la Ley General de Salud, en materia de drogas, busca garantizar los derechos fundamentales contenidos en los párrafos cuarto, séptimo y octavo del artículo 4° constitucional, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 4°. (Primer párrafo derogado.)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federales materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. **El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos***”.

226. -De tales disposiciones constitucionales, se advierte, en primer término, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que especial cuidado merece la salud de los niños y las niñas por ser un sector vulnerable de la población, siendo sus padres o tutores los obligados a preservar tal derecho, estando obligado el Estado a proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de tales derechos. En cumplimiento a tal obligación, se establecieron los ordenamientos legales impugnados en el juicio de garantías en comento.

227. -2.- Son necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción, es decir, en el caso en particular está demostrado científicamente que los efectos del consumo de cannabis y/o THC, es perjudicial a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo y las actividades relacionadas con dicha planta, se encuentra válidamente justificado y es necesario para evitar el deterioro a la salud de las personas que la consumen y a la de los consumidores pasivos que inhalan el humo generado del consumo.

228. -Lo anterior es así, ya que no consumir dicha droga es la forma idónea para evitar perjuicios físicos o psíquicos a las personas, no hay posibilidad de que exista algo menos restrictivo, es decir, que su consumo sea permitido dado que con alguna otra cosa se pueda contrarrestar los efectos negativos de su consumo, pues no existe forma de evitar el deterioro físico (DE LA SALUD) de las personas con el consumo de cannabis y/o THC, incluso en algunos casos puede tener

efectos irreversibles, Lo anterior es así, ya que de conformidad con la información proporcionada por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), el estímulo de receptores de Cannabinoides puede dar lugar a las siguientes respuestas:

- ❖ Sensación de euforia, sedación y relajación;
- ❖ Alteraciones de la percepción temporal;
- ❖ Actividad analgésica y antiinflamatoria;
- ❖ Actividad orexígena y antiemética;
- ❖ Ataxia, debilidad muscular;
- ❖ Disminución de la presión intraocular;
- ❖ Hipotermia;
- ❖ Broncodilatación;
- ❖ Hipotensión y taquicardia;
- ❖ Efectos neuroendócrinos;
- ❖ Inmunoestimulación a dosis bajas e inmunosupresión a dosis altas;
- ❖ Efectos antiproliferativos.

229. -Respuestas que indiscutiblemente, no otorgan al individuo una integridad personal ni lo ayudan a desarrollarse como persona; careciendo por tanto de un alto nivel de vida físico y psíquico. El consumidor de dichas drogas, no actúa con libertad, sino impulsado por una fuerza sensitiva, pierde su libre albedrío y está sometido a la fuerza sensitiva. No puede haber libertad contra la dignidad. Aun cuando sea un acto privado, el consumo de drogas no constituye un acto indiferente sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general. Por

lo tanto la ley debe prohibirlo, a fin de lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar que se vulnere la dignidad humana.

230. -3.- Son proporcionales, porque el grado de la restricción sobradamente es recompensada por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad.

231. Menciona que bajo esa óptica, por defender la libertad individual no se puede atropellar los bienes fundamentales de los asociados como los derechos a la vida, a la paz, a la salud, a la seguridad, a la convivencia, al bienestar, etc.

232. -Expresa que es de resaltar como una consideración prima facie, que se advierte que el cúmulo de derechos fundamentales contenidos en los artículos que la ahora recurrente invoca le fueron vulnerados, se contienen los derechos de identidad personal, principio de pluralismo, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación personal y corporal, libertad individual, dignidad humana y derecho a la salud, no obstante, se circunscriben única y exclusivamente en relación con el ser humano, conceptuado como persona física, como atinadamente lo estableció la A quo en la sentencia dictada en el juicio de amparo citado al rubro.

233. -Alega que si bien el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución Federal, establece que *“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”*; se entiende que el

término persona, lato sensu, refiere tanto a personas físicas así como a personas morales o jurídico colectivas.

234. -Manifiesta que sin embargo, existen derechos fundamentales inherentes y atinentes única y exclusivamente a la persona física como centro de imputación normativa y titular de derechos concernientes a sí misma, pero dichos derechos no pueden estar por encima de los de la colectividad y de los grupos vulnerables.

235. -Señala que este Alto Tribunal ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

236. -Arguye que en el caso en particular se impugnan los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479, todos de la Ley General de Salud. Advierte que dicha ley, considera como un estupefaciente la cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como sus isómeros o cualquier otro producto derivado o preparado que contenga tal sustancia, los de naturaleza análoga o cualquier otra sustancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General.

237. -Asimismo, precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la cannabis sativa, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

238. -Añade que se impone una prohibición absoluta en el territorio nacional, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras sustancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, ello en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

239. -Dice que del ejercicio de ponderación y análisis entre las disposiciones legales que contienen los derechos fundamentales transgredidos en relación con los artículos de la Ley General de Salud, tildados de inconstitucionales a la luz de los motivos de disenso expuestos, debe señalarse que éstos resultan inoperantes, dado que el recurrente no es titular de los derechos fundamentales que dice se transgreden en su contra, ya que éstos son personalísimos y de tipo subjetivo e inherentes a la naturaleza humana.

240. -Agrega que las prohibiciones contenidas en los artículos impugnados no son arbitrarias, no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga al ahora recurrente a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede

decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión de los recurrentes sobre datos relativos a su persona, quedando intocada la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás.

241. -Infiere que tampoco, no se vulnera en perjuicio del recurrente el desarrollo de su personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

242. -De igual forma, manifiesta que no existe violación a la intimidad de su persona, pues los numerales que consideran inconstitucionales no pretenden coartar su libertad de decidir qué aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

243. -Argumenta que en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, es de dar cumplimiento a la

obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4° constitucional, bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, preservando derechos de terceros y del orden público, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

244. -Asimismo, afirma que no existe violación al principio de autodeterminación, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

245. -Alega que las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de prohibir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinatarios a ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

246. -Considera que es obligación del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

247. -En ese sentido, estima que es infundado el concepto de violación hecho valer, pues la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

248. -Señala que respecto al tema del derecho a la salud, la prohibición contenida en los artículos impugnados es una medida instrumentalmente apta para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador legítimamente busca proteger, por tanto, no se violan en perjuicio de ninguna persona sus derechos de identidad personal, autodeterminación y disposición de la salud propia; pues contrario a lo señalado por los recurrentes, no se imponen modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

249. -Expresa que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y la impetrante de garantías pretende defender el derecho a la salud en su aspecto negativo, máxime que el consumo de marihuana no es un derecho fundamental: de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

250. -Infiere que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuvan a la creación, conservación, y disfrute de las condiciones de salud.

251. -Aduce que la salud es una necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales; por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.

252. -Argumenta que dado que la salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario a lo

señalado por la parte quejosa sea necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

253. -Dice que en sentido contrario a lo que aduce el recurrente, los preceptos que impugna, si bien es cierto establecen una prohibición, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o mariguana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su salud de modo que la afectación que la peticionaria de amparo pudiera resentir, encuentra justificación constitucional, más aun cuando lo que se procura es garantizar el derecho a la salud de terceros, por los motivos que se han venido señalando en el presente.

254. -Infiere que el derecho de acceso a la salud no se relaciona directamente con el derecho de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

255. -Expresa que no pasa desapercibido que el recurrente sostenga que el consumo de mariguana no genera graves daños a la salud, sino un riesgo de daño a su salud; porque tal afirmación se trata de una situación particular de la quejosa, la que pretende darle el carácter de derecho negativo, con el fin de obtener una autorización en su beneficio, sin que en este caso se encuentre demostrado lo aducido por ésta, y si, por el contrario, permitiría que gozara de una autorización que puede llegar a afectar a la salud de la población en general, por ejemplo en su consumo con la emisión de humo de segunda mano que afectara a las

personas a su alrededor, lo que no es jurídicamente permisible y que tampoco genera la inconstitucionalidad de la ley, el derecho del particular, debe ceder ante el interés público.

256. -Argumenta que en relación a que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad; individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero, contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, que permitan establecer que la medida no es proporcional para alcanzar los resultados deseados, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por la accionante de garantías.

257. -Señala además que el recurrente parte de un premisa errónea, pues considera como derecho la siembra, cultivo de marihuana, sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados es constitucionalmente válida, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte lo han constituido como un derecho; por tanto, los artículos impugnados no son inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como tal, de ahí que contrario a lo señalado por el impetrante de garantías, los artículos impugnados no deban cumplir con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

258. -Menciona que la protección del derecho a la salud, exige entre otras de las obligaciones de los Estados, que para garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas

positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo.

259. -Dice que lo mismo se desprende de la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual no es una mera declaratoria, sino que constituye una obligación de hacer para el Estado Mexicano al ser uno de los cincuenta y un miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron la Carta de las Naciones Unidas el veintiséis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco.

260. -Finalmente, expresa que en cumplimiento al artículo 4°, constitucional y a los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, entre ellos los citados por la ahora recurrente, el poder legislativo emitió los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en donde se respeta el derecho a la salud, ya que se protege a la sociedad, previniendo e inhibiendo la venta de marihuana que ocasiona daños fatales e incluso irreversibles a largo plazo.

261. **4.6.- Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.** Es relevante tomar en cuenta, que en el Tercer considerando de su fallo, el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó las siguientes precisiones:

“No es materia del presente recurso el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, que se reflejó en el resolutivo primero, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 63, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que por una parte la quejosa no formuló concepto de violación alguno a fin de demostrar la inconstitucionalidad de la orden de publicación de los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley de Salud.

Por otra, queda intocado el sobreseimiento decretado en relación con el artículo 479 de la Ley General de Salud, dado que se actualizó a juicio del juez de distrito, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acreditó la existencia del primero acto de aplicación”.

262. Ante ello, es evidente que no sólo quedó fuera de la litis el estudio de la inconstitucionalidad de la orden de publicación de la Ley General de Salud, sino también, lo argumentado por la quejosa en su demanda de amparo, en relación con el artículo 479 de la Ley General de Salud.

263. Esto es, como bien lo apuntó el Juez de Distrito, no serían motivo de estudio los argumentos planteados en el “Sexto concepto de violación” de la demanda respectiva, titulado: *“LA PENALIZACIÓN DEL AUTOCONSUMO DE MARIGUANA TRANSGREDE LA FINALIDAD OBJETIVA DEL DERECHO PENAL Y VULNERA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y CORPORAL”*, en el cual, la quejosa se refirió a la finalidad objetiva del régimen jurídico y a los límites deontológicos del derecho penal, para concluir que el autoconsumo de la marihuana es una conducta privada fuera del campo del derecho penal en la medida en que no perturba a la sociedad en general ni frente a terceros.

264. En otras palabras, quedó fuera de la *litis* del presente asunto, el combate a la penalización del autoconsumo de marihuana y de manera particular, no fueron objeto de estudio los argumentos vertidos en la demanda de amparo para controvertir la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan el consumo y otros actos relacionados con la marihuana, previstos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal,³¹ así como en los artículos 475, 476 y 477

³¹ **Código Penal Federal:**

“Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, **sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud**;

de la Ley General de Salud,³² concluyendo el Juez de Distrito que la respuesta emitida por la autoridad administrativa no guardaba relación alguna con la existencia de una conducta delictiva o la posibilidad de considerar que se actualizó la posesión del narcótico; de ahí que no se estimó actualiza la aplicación de dichos preceptos en perjuicio del quejoso.

265. Por otro lado, al estudiar el órgano colegiado del conocimiento, las causales de improcedencia hechas valer en escrito de revisión adhesiva,

[...].

Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, **sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud**, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código.

Artículo 195 bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, **sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud**, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos **en cualquier forma prohibida por la ley**.

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.

Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia”.

³² **Ley General de Salud:**

“Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien **sin autorización** comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

[...].

Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, **sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley**, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, **sin la autorización a que se refiere esta Ley**, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder”.

por el Presidente de la República, respondió sólo lo referido a la alegada falta de interés jurídico-legítimo del quejoso, en los siguientes términos.

266. En primer lugar, consideró que los argumentos vertidos en la revisión adhesiva debían estudiarse, excepcionalmente, antes que los de la principal, ya que en ellos **se alegaban cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de amparo**, lo que era un aspecto de orden público que conforme a la estructuración procesal debía dilucidarse preliminarmente al tema de fondo debatido.

267. En apoyo a lo anterior, el Tribunal Colegiado invocó la **Jurisprudencia P./J. 69/97**,³³ sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: **“REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL”**.

268. Bajo este contexto, a fin de analizar la causal de improcedencia planteada con relación a la **falta de interés jurídico o legítimo** del quejoso, el órgano colegiado estimó oportuno referir el marco jurídico que la prevé y en tal propósito invocó el artículo **61, fracción XII**, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

³³ Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, correspondiente a la Novena Época. Texto: “La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo”.

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I.- (...)

XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

XIII.- (...).”

269. En segundo término, refirió que en el caso, el quejoso de nombre *********, por propio derecho; **reclamó los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 de la Ley General de Salud**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, con motivo del que llama su primer acto de aplicación y que hizo consistir en el oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

270. Al respecto, consideró oportuno referir que de las constancias que integran el juicio de amparo de origen, se apreciaba que la autoridad responsable, Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consulta de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; al rendir su informe con justificación, remitió al juez del conocimiento diversas copias certificadas, dentro de las cuales se encuentran el escrito libre signado por *********, por propio derecho, mediante el cual solicitó: *“...otorgue la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocanabinol, los isómeros [6ª (10ª), 6ª (7), 8, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente “marihuana” o Cannabis”]. Se promueve la autorización para que el peticionario pueda **consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos**”, de*

fecha doce de noviembre de dos mil quince, y que fue registrado bajo el folio **153300EL350728**, según se lee del “Comprobante de Trámite” respectivo.

271. Asimismo, señaló que del oficio que se identifica como el primer acto de aplicación de los numerales reclamados, el cual fue anexado a la demanda de amparo, en la parte que a este estudio interesa, destacaba lo siguiente:

“(…)

Asunto: Autorización de consumo

(...) en relación a su solicitud con número de entrada ***** de fecha 13 de noviembre de 2015, en la que solicita autorización sanitaria para que el peticionario el C. *****, pueda consumir Cannnabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (Tetrahydrocannabinol), al respecto se informa:

Conforme al artículo 235 y 237 (sic) de la Ley General de Salud indica ‘Queda prohibido en el territorio nacional, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones’.

Conforme al artículo 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud se indica ‘Queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245 entre las sustancias enlistadas en la fracción I del Artículo 245 se encuentra THC (Tetrahydrocannabinol).

Por lo anterior expuesto hasta el momento no puede ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahydrocannabinol).

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL COMISIONADO DE AUTORIZACION SANITARIA.**

(...)”.

272. De la transcripción que se hizo del contenido del oficio en comento, se advirtió por el órgano colegiado que **el mismo constituía la respuesta a la petición que por escrito formuló el ahora quejoso** a la autoridad responsable, y, por ende, estimó **infundada** la causal de improcedencia alegada por la revisionista adhesiva.

273. Manifestó que lo anterior era así, dado que a través de dicho oficio, se comunicó al hoy demandante que por razón de las prohibiciones contenidas en los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud, no podía ser autorizada, por el momento, su petición contenida en el escrito con número de entrada *********, en la que solicitó autorización sanitaria para consumir Cannnabis Sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (Tetrahidrocannabinol); fundamentación y motivación que el órgano colegiado consideró suficiente para **concluir que al quejoso le asistía interés jurídico para combatir el oficio en cuestión**, así como las normas en que se apoya, al margen de que a través de sus conceptos de violación consiguiera demostrar la violación a sus derechos fundamentales de que se duele, de ahí que era infundada la causa de improcedencia aducida.

274. En el Quinto considerando de su fallo, el Tribunal Colegiado, precisó que no existía alguna otra causal de improcedencia propuesta por las partes, o bien, que se advirtiera de oficio, y así, estimó también que por el momento resultaba innecesario realizar el análisis de los argumentos formulados por el Presidente de la República en su oficio de revisión adhesiva, dado que por virtud de las consideraciones expuestas en el fallo, **quedaron desestimadas las razones de improcedencia propuestas** y de la lectura de los conceptos de agravio esgrimidos, advirtió que se encontraban el resto de los argumentos relacionados con

el fondo del asunto, por lo que su estudio dependería de lo que resolviera el Máximo Tribunal de la Nación respecto de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

275. Sobre ello, es pertinente aclarar que la revisión adhesiva, si bien se suscribió por una servidora pública de la Secretaría de Salud, se interpuso sólo expresamente respecto del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más no con respecto al Secretario de Salud.

276. **QUINTO.- Remisión del asunto al Tribunal Colegiado de Circuito.** A fin de que se de cabal cumplimiento a lo ordenado en el inciso a), de la fracción I, del punto cuarto,³⁴ en relación con la fracción II, del punto noveno,³⁵ ambos, del Acuerdo 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de este Alto Tribunal, esta Primera Sala advierte que el presente asunto debe remitirse de nueva cuenta al **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, toda vez que de autos y de lo reseñado en el considerando anterior, se advierte que el mismo no agotó el estudio de la totalidad de las causales y motivos de improcedencia que en su escrito de revisión adhesiva, se plantearon por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de autoridad responsable.

³⁴ “**CUARTO.** De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: **I.** Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: **A)** No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”;

³⁵ “**NOVENO.** En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los términos siguientes: **II.** Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio”;

277. El aserto anterior, se sustenta en las siguientes consideraciones:

278. **5.1.- Causales de improcedencia que fueron motivo de análisis por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.** En primer término, conviene referir que en la resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el juez del conocimiento:

279. **a).- Oficiosamente,** estimó que, en el caso, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII de la Ley de Amparo, con respecto al acto reclamado consistente en la **orden de publicación de la Ley General de Salud**, pues respecto del mismo, la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno a fin de demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto por vicios propios.

280. **b).- Oficiosamente,** estimó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, con relación al artículo 479 de la Ley General de Salud, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la existencia del **primer acto concreto de aplicación** del referido numeral. Como consecuencia de ello, estimó que no serían motivo de análisis los argumentos planteados en el Sexto concepto de violación de la demanda de amparo, relativos a la penalización del autoconsumo de marihuana.

281. **c).- Estimó infundada** la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que hizo valer el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la **inexistencia de distintos actos** reclamados al mismo, puesto que los

únicos actos reclamados a dicha autoridad, fueron los de la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud.

282. **d).- Estimó infundada** la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII de la propia ley (aplicados en contrario sensu), con respecto al acto reclamado consistente en la **promulgación** de la Ley General de Salud, ya que sí se expresaron al respecto conceptos de violación.

283. **e).- Estimó infundada** la causal de improcedencia que el Titular del Ejecutivo Federal y el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, hicieron valer con base en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 73 y 77 de la citada legislación, en cuanto a que **de concederse el amparo, sus efectos:**

284. **-Desvirtuarían la voluntad del legislador** al reglamentar el derecho a la protección de la salud;

285. -Implicarían dar **efectos generales a la ejecutoria**, ya que se vincularía no sólo al peticionario del amparo, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con los ordenamientos tildados de inconstitucionales.

286. Para arribar a la conclusión de que dicha causa y motivos de improcedencia eran infundados, el Juez de Distrito analizó lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 77 de la Ley de Amparo; refirió que el amparo es improcedente cuando se conceda la protección constitucional

y el efecto jurídico de la sentencia que se pronuncie no pueda materializarse; citó tesis relacionadas con los efectos de las sentencias de amparo; consideró lo previsto en el artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Federal en cuanto a que las sentencias sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado; explicó la prevalencia del principio de relatividad y concluyó que, en el caso, de que se concediera el amparo al peticionario de garantías, el efecto de la ejecutoria se traduciría en que tales preceptos no se aplicaren al quejoso, razón por la que no existiría imposibilidad legal para decretar los efectos del amparo, aunado a que con ello no se darían efectos a la ejecutoria de mérito, pues la protección constitucional únicamente sería en beneficio del propio quejoso, sin que se vinculara a la población en general.

287. Es importante destacar que, aunque en este aspecto, las autoridades responsables antes citadas, descansaron la denuncia de la causal de improcedencia que nos ocupa (*efectos generales de la sentencia*), entre otros argumentos, en la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: **“LEYES. AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENCIA AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL”**,³⁶ y referida en realidad a casos de omisión legislativa, el juzgador no hizo referencia expresa a tal supuesto, aunque puede aceptarse que finalmente, el juzgador sí dio respuesta al motivo de improcedencia relacionado con la denuncia de que una eventual concesión del amparo, daría efectos generales a la ejecutoria en violación al principio de relatividad que persiste en los juicios de amparo,

³⁶ Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: VI, Diciembre de 1997, Página 180, Tesis P.CLXVIII/97, Materia Común.

pues básicamente a dicha cuestión se dirigieron los argumentos de las autoridades responsables.

288. **f).- Estimó inatendible** la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que denunció el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, consistente en que no era cierto el acto reclamado consistente en la aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248 y 368 de la Ley General de Salud.

289. Lo anterior, puesto que el juzgador estimó que dicho acto era cierto, pues la determinación que recayó a la solicitud de autorización formulada por el quejoso, se emitió con fundamento en dichos preceptos, sin que obstore a ello que el numeral 234 no hubiese sido invocado de manera destacada, pues la impugnación propuesta por el solicitante del amparo, era con motivo de que los citados ordenamientos, formaban parte de la regulación prohibitiva de los estupefacientes respecto de los cuales solicitó su autorización, de ahí que los preceptos se combatían como un sistema normativo.

290. **g).- Finalmente, estimó infundada** la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que refirió el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, consistente en que respecto de la emisión de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, que determinó negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, debió haberse agotado el ***principio de definitividad*** que rige el juicio de amparo, pues previamente, debió agotarse el recurso de revisión y una vez resuelto dicho medio de defensa, se debió promover el juicio de nulidad.

291. Al respecto, el juzgador estimó que dicho principio no opera de manera absoluta, y que entre las excepciones que permite, lo está la impugnación de leyes con motivo del primer acto de aplicación.

292. Ante lo anterior, y contrastando las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables en sus informes justificados, con lo argumentado en su sentencia por el Juez de Distrito del conocimiento, puede arribarse a la conclusión de que éste, después de advertir oficiosamente algunas causales de improcedencia con respecto a determinados actos reclamados, **estudio exhaustivamente las causales que se hicieron valer por las partes**, sin que quedara pendiente el estudio de alguna causal o motivo de improcedencia planteado por las mismas.

293. **5.2.- Causales de improcedencia que fueron motivo de análisis por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.** En esta resolución de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, el órgano colegiado del conocimiento:

294. **a).-** Dejó intocados los sobreseimientos decretados con relación a la **publicación** de los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, así como con relación al no acreditamiento de la existencia del **primer acto de aplicación del artículo 479** de la propia ley.

295. **b).-** Estudió la causa de improcedencia que el Presidente de la República refirió en su oficio de revisión adhesiva, con relación al argumento de que el quejoso carecía de interés jurídico/legítimo para reclamar los artículos de que se duele, al no existir en su esfera jurídica

un acto de aplicación de los numerales reclamados. Esta causal, que hizo valer con base en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se identificó en el referido oficio en el Capítulo de *“PROCEDENCIA DEL RECURSO”*, como apartado *“PRIMERO”*, y fue estimada **infundada** por el Tribunal Colegiado del conocimiento, al considerar que, el oficio que negó la autorización solicitada, se fundó y motivó en los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud, lo que se estimaba suficiente para concluir que al quejoso le resultaba de interés jurídico para combatir el oficio en cuestión, así como las normas en que el mismo se apoyaba.

296. **c).- Estimó** que no existía alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes, o bien, que se advirtiera de oficio.

297. Sin embargo, es evidente de autos y de lo reseñado en el considerando anterior, que este último aserto del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no resulta correcto.

298. Ello, pues basta dar lectura al Capítulo de *“PROCEDENCIA DEL RECURSO”*, para advertir que, en el mismo, se incorporan distintos argumentos identificados como ***“Segundo”*** y ***“Tercero”***.

299. En cuanto al argumento identificado como ***“Tercero”***, se vierten alegaciones adicionales relacionadas con la denuncia de que el quejoso carece de interés jurídico/legítimo, pues en el oficio de respuesta a la solicitud de autorización, sólo se citaron los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin que ello constituya acto de aplicación alguno, para lo cual, se citó la tesis de rubro: ***“LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN”***.³⁷

³⁷ Tesis 1ª. V/2008. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 425.

300. Sobre ello, puede decirse que si bien de forma general, el Tribunal Colegiado que conoció previamente del asunto, respondió a las alegaciones que sobre la falta de interés jurídico/legítimo del quejoso, realizó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto que dicha respuesta no fue puntual, y no agota lo planteado por dicha autoridad responsable en cuanto a los motivos específicos por los que en los apartados “*Primero*” y “*Tercero*”, se aduce que el quejoso carece de interés jurídico/legítimo.

301. Lo anterior, máxime que en el apartado “*Primero*”, se hace referencia a cuestiones afines a la *naturaleza heteroaplicativa de las normas impugnadas* y en el tercer apartado, a que *la sola cita de preceptos, no constituye un acto de aplicación*; cuestiones que si bien están relacionadas, no parecen haber sido exhaustivamente analizadas en el Cuarto considerando de la sentencia de fecha seis de julio de dos mil dieciséis.

302. Esto es así, pues el estudio de improcedencia que realizó el Tribunal Colegiado, se centra, en general, en el motivo de improcedencia denunciado en el sentido de que no existió un acto de aplicación de los numerales reclamados, pero sin que en ello se diera respuesta específica en cuanto a, por ejemplo, lo alegado en el sentido de que tales preceptos, únicamente fueron citados más no aplicados, ni menos aún, en cuanto a si resultaba o no aplicable la tesis invocada por la referida autoridad responsable. De hecho, en el apartado “*Tercero*”, se alega también que el quejoso no acredita de manera fehaciente que normalmente lleva a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, y dicha cuestión tampoco fue analizada por el órgano colegiado que antecedió en el conocimiento del asunto.

303. En tal sentido, si bien es permitido que los argumentos de las partes en general, y en el caso, de las causales de improcedencia que hacen valer las partes, pueda realizarse de manera conjunta, ello no excusa la omisión de estudio de cada motivo específico por el que se alegue que existe una razón por la que deba sobreseerse en el juicio de amparo.

304. A mayor abundamiento, si bien del fallo dictado por el Tribunal Colegiado que nos ocupa, se advierte que el mismo enfoca su respuesta genérica a la causal de improcedencia que en los apartados “*Primero*” y “*Segundo*” del Capítulo de Procedencia del escrito de revisión adhesiva del Presidente de la República, se hace valer en cuanto a la falta de interés jurídico/legítimo del quejoso, no queda claro de dicho análisis en qué forma se responden los motivos específicos por los que la autoridad responsable señalada, en dos apartados diferentes, consideraba que se actualizaba dicha causal de improcedencia.

305. Por otro lado, lo que sí resulta incuestionable, es que en ninguna forma, el Tribunal Colegiado se ocupa de estudiar lo planteado por el Presidente de la República en el apartado “*Segundo*” del capítulo de “*PROCEDENCIA DEL RECURSO*”, contenido en el oficio de revisión adhesiva presentado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y es que, en efecto, dicho Tribunal centró su estudio de improcedencia únicamente en cuestiones afines al interés jurídico/legítimo del quejoso.

306. Sin embargo, en el apartado “*Segundo*” referido, se incluyen distintos argumentos que abonan nuevos posibles motivos de improcedencia, relacionados con los efectos de la eventual concesión de amparo, en cuanto a la ***inviabilidad de que la misma pueda tener***

efectos materiales y en cuanto a la posible ***violación al principio de relatividad*** de la sentencia.

307. Y es que, si bien es cierto que dichas causales, en lo general, ya habían sido hechas valer ante el Juez de Distrito en el informe justificado respectivo, quien las desestimó, no menos cierto es que en el oficio de revisión adhesiva se incluyen, entre otros, los siguientes nuevos posibles motivos que actualizarían dichas causales y que no fueron planteados ante el juez ni menos aún estudiados por el mismo:

308. **-No es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de marihuana, conlleva la comisión de un delito.**

309. **-No fue motivo de análisis el proceso de adquisición, comercio o recepción del narcótico.**

310. **-El quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita.**

311. **-De concederse el amparo se violarían distintos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.**

312. **-De concederse el amparo, no quedan exentos de la comisión del delito quienes provean al quejoso de la droga ni el propio quejoso.**

313. De hecho, en la forma en que son planteados, los argumentos referidos no necesariamente estarían vinculados a las causales de improcedencia relativas a los efectos prácticos de la ejecutoria de amparo y a la posible violación del principio de relatividad de la

sentencia, sino que dichos motivos, se plantean también para ser estudiados propiamente como causales de improcedencia en sí mismas y no sólo como motivos de una causal diversa, pues, por ejemplo, el que la sentencia de amparo, de ejecutarse conlleve la comisión de uno o más delitos, está relacionado no sólo con la posibilidad de que una sentencia se materialice y con que ello pueda tener efectos sobre personas distintas al quejoso, sino también, con los fines y la naturaleza del juicio de amparo.

314. Ello se afirma así, pues en el propio apartado “Segundo” citado, la autoridad responsable precisa distintas cuestiones que, si bien tienen relación entre sí, merecen una respuesta concreta en cada caso, pues parten de la imposibilidad legal que existe para que el quejoso acceda a la semilla de la “cannabis” o a la propia droga, siendo que, en el caso, no se solicitó el amparo con respecto a actos relacionados con su adquisición.

315. Pero más aún, lo anterior lleva a interrogantes relacionadas con el hecho de que, si el quejoso accediera a la droga, podría estar cometiendo un delito quien le proporcionare la misma, y el propio quejoso como receptor del producto de un delito, cuestiones todas ellas que, entre otras, se refieren en el oficio de revisión adhesiva y no son estudiadas por el Tribunal Colegiado, ni fueron tampoco merecedoras de mención alguna de las razones por las que no se estudiaron.

316. Así, es indudable que el Tribunal Colegiado, sólo atendió o respondió parcialmente los argumentos de improcedencia que le fueron planteados por el Presidente de la República, como autoridad responsable y revisionista adhesiva, y que, por tanto, existen aún cuestiones que deben estudiarse y, en su caso, desestimarse o

estimarse procedentes, antes de que se proceda al fondo del estudio del asunto.

317. En tal sentido, es necesario que el **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, se pronuncie previamente respecto de las alegadas causales y motivos de improcedencia referidos y de otros que, en su caso, pueda advertir oficiosamente, antes de que esta Primera Sala resuelva, de aún ser necesario, sobre el fondo del presente asunto.

318. Lo anterior, tomando en cuenta las facultades que han sido delegadas a los Tribunales Colegiados de Circuito en el Acuerdo 5/2013 ya citado, y que en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

“ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. --- [...] --- A C U E R D O: --- [...] --- TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito. --- CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: --- I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: --- A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. ---Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer

necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; --- B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquellos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; --- C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y --- D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia; --- [...] --- OCTAVO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las reglas siguientes: --- I. Los amparos en revisión se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito que hubiese dictado la sentencia respectiva. --- Cuando en el circuito correspondiente existan dos o más Tribunales Colegiados se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno. --- Cuando los asuntos sean numerosos se distribuirán equitativamente; -- II. Los conflictos de competencia y los reconocimientos de inocencia se remitirán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno en el conocimiento del juicio, aplicando en lo conducente el párrafo segundo de la fracción anterior, y --- III. Los asuntos que, actualizándose la hipótesis contenida en el inciso D) de la fracción I del Punto Cuarto de este Acuerdo General, se encuentren con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán remitirse por dicha Secretaría, dando aviso a la Subsecretaría General de Acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de este punto. --- En este caso, en virtud de que la existencia del proyecto no será obstáculo para que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva, se le enviará con el expediente una copia certificada y versión electrónica de las ejecutorias respectivas y, en su caso, de la o las tesis correspondientes. --- Los Tribunales Colegiados de Circuito no podrán objetar su competencia e informarán a la Secretaría General de Acuerdos cuando resuelvan los asuntos que les hayan correspondido, en términos del Punto Décimo Tercero de este Acuerdo General. --- **NOVENO.** En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, **el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los términos siguientes:** --- I. Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su caso, sobre el desistimiento o la reposición del procedimiento; --- **II. Abordará el**

estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio; --- III. De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada previstos en el Punto Cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), de este Acuerdo General, el Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad; --- IV. Si el problema de fondo es de la competencia del Tribunal Colegiado conforme a este acuerdo, examinará, primero, el problema de inconstitucionalidad de leyes planteado en la demanda y, en su caso, el de mera legalidad, y --- V. Si al conocer de un amparo indirecto en revisión algún Tribunal Colegiado de Circuito establece jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal, lo comunicará por escrito al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. --- DÉCIMO. En los casos previstos en los incisos B), C) y D) de la fracción I, así como en las fracciones II y III del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán en su integridad las cuestiones de improcedencia, de fondo y de cualquier naturaleza que, en su caso, se presenten. --- DÉCIMO PRIMERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los de las Salas enviarán los asuntos a que se refiere el Punto Cuarto del presente Acuerdo General cuando adviertan que así proceda, o bien a solicitud de los Ministros designados como ponentes, en el caso de que los expedientes de nuevo ingreso hubiesen sido turnados para elaborar el proyecto de resolución. --- No podrán remitirse asuntos aplazados o retirados por el Pleno o las Salas, salvo el caso previsto en el inciso D) de la fracción I del Punto Cuarto de este Acuerdo General. --- [...] --- TRANSITORIOS: --- PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. --- [...].”

319. Los motivos expuestos en la parte considerativa del acuerdo transcrito, dejaron en claro que el fin de su emisión es reafirmar que este Alto Tribunal dedique sus esfuerzos al conocimiento y resolución de fondo de aquellos asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel de importancia y trascendencia sobre "constitucionalidad" y que, por tal motivo, impacten en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional, finalidad que inició al emitir los Acuerdos Generales 1/1997, 6/1999, 1/2000, 4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001, 4/2001 y 5/2001.

320. Por ello, y a fin de unificar e integrar los criterios emitidos en dichos acuerdos, se dictó el diverso 5/2001 que fue derogado por el 5/2013 (ya transcrito en lo conducente), en el que se mantuvo el claro objetivo de ser un tribunal estrictamente constitucional.

321. Por lo anterior, con el objetivo de aplicar correctamente lo que se estableció en el citado Acuerdo 5/2013, deben tenerse presentes los diversos criterios sustentados por este Máximo Tribunal, que aun cuando fueron emitidos en virtud de la aplicación del Acuerdo Plenario 6/1999, actualmente abrogado, resultan plenamente aplicables al caso que nos ocupa, pues ahí se resalta el objetivo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de revisar asuntos en donde siga subsistente la materia de constitucionalidad, cuando ya se hayan agotado y superado **de manera previa y por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente**, todos los argumentos sobre causales de improcedencia planteados por las partes, sea en sus informes justificados, apersonamientos, comparecencias o, incluso, en vía de agravios, de revisiones principales o adhesivas, así como las causales que se adviertan de oficio, e igualmente, cualquier otro motivo que pueda impedir un análisis del fondo del asunto. Dichos criterios son los siguientes:

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPEDÍAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE FONDO PLANTEADO, DEBE DEVOLVERSE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA, INCLUSO EN AQUELLOS ASUNTOS NO MENCIONADOS EXPRESAMENTE EN EL ACUERDO 6/1999, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Si bien es cierto que en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, se mencionan de manera enunciativa diversos supuestos en los que se facultó a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre la procedencia de asuntos cuya competencia originaria corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que no se encuentra incluido el planteamiento de un conflicto por invasión de esferas, también lo es que, por identidad de razón, a las hipótesis previstas expresamente en el mencionado punto debe agregarse el supuesto últimamente

citado, así como cualquier otro que siendo competencia originaria de este Alto Tribunal, al dictarse en la audiencia constitucional la sentencia por el a quo, no se haga el estudio de fondo, pues la intención de este Alto Tribunal con la emisión del aludido acuerdo es que dedique sus esfuerzos al conocimiento y resolución de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia impacten en el orden jurídico nacional. En tales condiciones, si un Tribunal Colegiado de Circuito omite analizar las causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados o las que operen de oficio que impedían el estudio del problema de fondo planteado, deben devolverse los autos al citado Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, y se ocupe del estudio de la totalidad de las causales de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y de que no exista motivo alguno que impida el análisis de fondo, deje a salvo la jurisdicción originaria a la Suprema Corte de Justicia”.³⁸

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVERSE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO 6/1999 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El punto tercero, fracción I, del citado acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre todas las cuestiones de procedencia en los casos en que se hubiera reclamado, en amparo indirecto, la inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional, o se hubiese planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, no se hubieran pronunciado en cuanto al fondo; en tales supuestos, el acuerdo establece que si de los agravios propuestos el Tribunal Colegiado estima que no subsiste la causal de improcedencia considerada por el a quo, ni existe ninguna otra causa o motivo que impida el estudio de fondo, debe revocar la sentencia recurrida, reservar la competencia de la Suprema Corte y remitirle los autos para los efectos procedentes. Ahora bien, puede suceder que el Tribunal Colegiado se limite a declarar su incompetencia, por estimar que el conocimiento del asunto de que se trata corresponde al Máximo Tribunal de la República al haberse resuelto el fondo, y que en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad planteado, pero omite estudiar los agravios propuestos en contra del sobreseimiento decretado, que de resultar fundados, ello constituiría una infracción a las reglas esenciales del procedimiento del juicio de amparo, lo que daría lugar a que se revocara la sentencia recurrida y se ordenara la

³⁸ Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Tesis **2a. CLXXXIX/2001**, Página 439. Amparo en revisión 333/2001 *****. 21 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

reposición del procedimiento; también puede ocurrir que el Tribunal Colegiado sólo estudie el motivo de sobreseimiento decretado por el a quo, revocando éste y remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin hacerse cargo de las demás causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados. En ambas hipótesis, lo procedente es devolver los autos al Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, ocupándose del estudio de la totalidad de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y no exista ningún motivo que impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, reserve jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.³⁹

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A VERIFICAR SU PROCEDENCIA Y A PRONUNCIARSE SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN QUE AFECTE ESA INSTANCIA, CUANDO CONOCEN DE AQUÉL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO 6/1999 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUBLICADO EL 23 DE JUNIO DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo establecido en la citada disposición de observancia general, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los recursos de revisión en amparo indirecto cuando en la sentencia recurrida no se hubiere efectuado el análisis de las cuestiones propiamente constitucionales por haberse sobreseído en el juicio o por cualquier otro motivo; y, en la hipótesis de que el respectivo tribunal estime que no se actualiza la causa de sobreseimiento revocará la sentencia recurrida y, en caso de que no exista jurisprudencia aplicable respecto de las referidas cuestiones, dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá el asunto. Ante tal disposición, debe concluirse que de acuerdo con su interpretación teleológica y sistemática, entre las atribuciones que fueron delegadas a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, y que deben ejercer, se encuentra la necesaria para verificar si el mismo cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia, entre otros, que se haya hecho valer en tiempo, que se interponga por la persona que goce de la capacidad procesal necesaria y que la resolución reclamada afecte la esfera jurídica del recurrente, inclusive, ocuparse de revisar que la instancia respectiva no haya caducado y, en su caso, proveer sobre

³⁹ Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000., Tesis **2a./J. 84/2000**, Página 112. Amparo en revisión 1700/99. *********. 14 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. Amparo en revisión 648/2000. *********. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Amparo en revisión 1623/99. *********. 23 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en revisión 1685/99. *********. 23 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en revisión 612/2000. *********. 7 de julio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

el desistimiento que de la misma se manifieste por aquél; conclusión a la que se arriba tomando en cuenta que la finalidad primordial del referido acuerdo general fue la de lograr que la Suprema Corte de Justicia conociera exclusivamente de cuestiones de constitucionalidad de trascendencia e importancia, dentro de las cuales no pueden ubicarse las correspondientes a analizar si la instancia respectiva cumple con los requisitos legales que condicionan su procedencia, y que conforme al contenido del artículo 90, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la revisión conlleva la necesaria para calificar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la apertura de esa instancia; máxime que, de estimarse lo contrario, ello implicaría atribuir al creador del referido acuerdo general la intención de permitir la resolución de recursos sin el estudio previo de su procedencia, cuando constituye un principio general que rige la actuación de todo órgano jurisdiccional el que antes de abordar el estudio de las cuestiones que le sean planteadas mediante una determinada instancia, debe analizar de oficio si la misma cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia”.⁴⁰

322. Ahora bien, al tenor del argumento substancial reflejado en tales criterios, esta Primera Sala considera que el citado Tribunal Colegiado, dejó de atender al contenido del punto cuarto, fracción I, inciso A), en relación con el punto noveno, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 en mención, que **otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver las cuestiones de procedencia** en los casos en que se hubiera impugnado, en amparo indirecto, una ley federal o un tratado internacional, o se hubiere planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal; cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, hubiera decretado el sobreseimiento, o bien, se hubiere abordado el estudio de fondo y en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

323. De los citados puntos de acuerdo, se advierte que se dejó a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, **resolver sobre la procedencia** en aquellos casos en que habiéndose reclamado en un

⁴⁰ Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001., Tesis **2a. XXX/2001**, Página 201. Amparo en revisión 716/2000. *****. 16 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad de una ley federal y en la revisión, subsistan cuestiones referentes a la procedencia del juicio; en tal hipótesis, sólo hasta después de que el tribunal analice y en su caso, desestime **todos los motivos** que se hubieran aducido **en relación a las causas de improcedencia hechas valer** (se insiste: en informes justificados, apersonamientos, comparecencias o, incluso, en vía de agravios, en revisiones principales o adhesivas), así como respecto a las que en su caso se hubieran estimado materializadas en el juicio, o las demás que advierta de oficio, e igualmente, respecto a cualquier otro motivo que pueda impedir un análisis del fondo del asunto, deberá reservar jurisdicción originaria, remitir los autos a este Alto Tribunal, para los efectos legales procedentes, pero, se insiste, **previamente a dicha remisión debe agotar el examen de todas las cuestiones referidas.**

324. Es igualmente aplicable en el caso particular que nos ocupa, la Jurisprudencia **2a./J. 153/2012 (10a.)**, emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal y que comparte esta Primera Sala, de rubro: **“REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL”**, puesto que se considera que si bien el recurso de revisión adhesiva no constituye propiamente un medio de impugnación, sí permite informar al tribunal que conozca del asunto sobre la existencia de situaciones que hagan improcedente el recurso de revisión, e incluso, el propio juicio de amparo del cual éste derive.⁴¹

⁴¹ Época: Décima Época. Registro: 2002395. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 153/2012 (10a.). Página: 834. Texto: *“El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 69/97, de rubro: “REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL”, sostuvo que la procedencia, como presupuesto procesal, es de estudio preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, como los presupuestos procesales constituyen requisitos indispensables para tramitar con eficacia jurídica un proceso o, en su caso, pronunciar la resolución de fondo, es válido afirmar que quien interpone la revisión adhesiva puede expresar agravios relativos a la procedencia de la revisión principal, cuyo estudio es preferente, pues aun cuando, conforme a los criterios sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión adhesiva no es un medio de impugnación, sí permite informar al tribunal ad quem sobre la existencia de situaciones que hagan improcedente el recurso de revisión.”*

325. Con base a lo antes expuesto, se concluye que existen motivos concretos que, correcta o incorrectamente se adujeron como causales de improcedencia por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y que siguen sin resolverse por la instancia que resulta competente en términos del Acuerdo Plenario 5/2015 de este Alto Tribunal (normativa que, por su origen, incluso es de observancia obligatoria para esta Sala).

326. Luego, para dar acatamiento a lo dispuesto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el referido Acuerdo Plenario, lo que procede es devolver al **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, el recurso de revisión y los autos para que se avoque a resolverlos, pronunciándose también sobre todas las demás cuestiones que sean conducentes y de estudio previo al fondo del asunto. Ello, de tal forma que sólo en el caso de que dicho tribunal llegara a desestimar expresa y puntualmente los motivos de improcedencia argumentados y pendientes de análisis, **así como de que no exista ningún otro motivo que impida el análisis de fondo del asunto**, remita los autos a este Alto Tribunal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Devuélvanse al **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, el recurso de revisión y los autos para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Contradicción de tesis 56/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia Penal del Primer Circuito, Tercero del Décimo Segundo Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 3 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. Tesis de jurisprudencia 153/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de octubre de dos mil doce. Nota: La tesis jurisprudencia P./J. 69/97 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 117.

Notifíquese, con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En contra del emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reserva su derecho de formular voto particular.

Firman la Ministra Presidenta de la Sala y el Ministro Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

**SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA**

**LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES
GUTIÉRREZ GATICA**

En términos de lo previsto en los artículos 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.